



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”**

ESCUELA DE POSTGRADO



MAESTRIA EN DERECHO

**“LA CRISIS DEL PROCESO DE ALIMENTOS ANTE LA
REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DE LOS OBLIGADOS A LA
PRESENTACION COMO CAUSAL DE ELIMINACIÓN DEL TIPO
PENAL DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTOR

Abog. VERÓNIKHA JANET SANTA CRUZ RONDOY

ASESOR

DR. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTES

LAMBAYEQUE – PERU

2018

“LA CRISIS DEL PROCESO DE ALIMENTOS ANTE LA REALIDAD SOCIO
ECONÓMICA DE LOS OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, Y SU
ELIMINACIÓN DEL TIPO PENAL DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”.

Abog. Verónikha Janet Santa Cruz Rondoy
AUTOR

Dr. Miguel Arcángel Arana Cortes
ASESOR

Presentada a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Gallo, para
optar el grado de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
PENALES.

APROBADO POR

Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
SECRETARIO DEL JURADO

Dr. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
VOCAL DEL JURADO

23 de octubre del 2018

DEDICATORIA

Le dedico este trabajo a:

Mi hijo José Manuel por ser la luz que ilumina mi vida, y la razón que me impulsa a ser mejor cada día.

Mis padres Manuel e Isabel por mostrarme el camino hacia la superación.

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a mis padres Manuel Santa Cruz Pérez e Isabel Rondoy Bustamante por ser los pilares que sostiene mi vida, por brindarme todo su tiempo, por los consejos diarios, y por el apoyo incondicional que siempre me han brindando durante el desarrollo de mi carrera profesional, que me ha ayudado a ser la profesional que soy, hoy en día.

ÍNDICE

HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS	03
DEDICATORIA	05
AGRADECIMIENTO	06
ÍNDICE	08
RESUMEN	13
ABSTRACT	18
INTRODUCCIÓN	23
PRIMERA PARTE	27
Análisis del objeto de estudio	
1. Ubicación	27
2. Planteamiento del problema	29
3. Formulación de la pregunta problematizadora	35
4. Justificación e importancia de estudio	36
5. Objetivos	37
SEGUNDA PARTE	40
Desarrollo de la investigación y del marco teórico de la tesis	
1. Antecedentes en la ejecución de la investigación	40

2. Marco teórico utilizado en la investigación	41
 CAPÍTULO I	 42
El análisis del contexto preliminar en el ámbito del estudio de la presente tesis	
 1.1. La realidad de las relaciones disfuncionales en el ámbito familiar en el país	42
1.1.1. La realidad de las relaciones disfuncionales en el ámbito familiar en Motupe, como zona geográfica de estudio	45
1.2. El contexto de los casos más referenciales en el ámbito de la crisis familiar	45
1.3. El análisis del contexto jurisdiccional en la especialidad civil o de familia	48
1.4. El análisis del contexto jurisdiccional en la especialidad penal	51
1.5. La importancia del estudio del contexto preliminar a la ejecución de procesos judiciales	53
 CAPÍTULO II	 56
El análisis casuístico en evaluación	
 2.1. Respecto de los procesos judiciales como contexto preliminar de estudio	58
2.2. El análisis socio económico de la realidad de Motupe en el ámbito jurisdiccional en los temas de estudio	61
 CAPÍTULO III	 73
El proceso de alimentos: el primer proceso	

(solicitud, determinación y exigibilidad)

3.1. La evaluación de las etapas en la exigencia del pago de alimentos a favor del hijo	74
3.2. El proceso principal, los procesos complementarios y los recursos paralelos	82
3.3. La evaluación de la capacidad económica de la madre	86
3.4. La determinación de las condiciones del obligado a prestar alimentos	88
3.5. El interés superior del niño determinado en el ámbito judicial	90

CAPÍTULO IV

El delito de omisión en la prestación de alimentos: el segundo proceso

4.1. La omisión de asistencia familiar como “delito” en el ámbito del derecho comparado	94
4.2. Respecto del tipo penal de omisión de prestación de alimentos	97
4.3. El derivo e inicio de una instancia judicial penal a petición de un primer proceso ya finalizado	101

CAPÍTULO V

La despenalización del delito de omisión de asistencia familiar, sólo en caso de imposibilidad material del obligado a prestar alimentos (hipótesis de tesis)

TERCERA PARTE

1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados	113
2. Presentación del modelo teórico	115
CUARTA PARTE	121
Aspectos metodológicos de la investigación	
1. Diseño de contrastación de la hipótesis	121
2. Población y muestra	124
3. Análisis de las variables e indicadores utilizados en la investigación	126
4. Localidad e institución donde se desarrolló la investigación	129
5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos	130
6. Descripción detallada de la metodología empleada	131
7. Aspectos administrativos	133
CONCLUSIONES	137
RECOMENDACIONES	140
BIBLIOGRAFÍA	143

RESUMEN

En el ámbito del desarrollo de conflictos vinculados al ámbito familiar en nuestra sociedad, hemos podido observar que existen dos constantes vinculadas que provocan el desarrollo de un contexto mucho más complejo y complicado de resolver, tanto por los problemas que implican en el ámbito individual a nivel de las relaciones familiares como a nivel social, por cuanto la familia se resquebraja y finalmente, en el ámbito de la atención de los servicios públicos por parte del Estado.

Estas dos referencias son los procesos de alimentos y los procesos de violencia familiar que lamentablemente se complementan siempre en contextos de familias en crisis o en casos en los cuales la "familia" no ha logrado materializarse, debido principalmente al contexto en el cual se ha generado las relaciones interpersonales.

Así, la regla constante en estos casos de familia en crisis son las referencias a casos en los cuales una "pareja" no ha logrado constituir una familia y en aquellos casos en los cuales una "familia" se ha desintegrado es porque los factores personales de quienes la conformaban han cambiado y ello ha provocado una crisis profunda que finalmente ha determinado por condicionar los comportamientos y actos de las partes en este conflicto familiar.

De este modo o surge en primer término el contexto de violencia familiar o surge el problema de la manutención de la familia y en ambos casos el contexto siempre es de "violencia", como elemento constante y que se incrementa en la medida en que las partes no logran solucionar eficazmente sus posiciones en el debate

preliminar en el cual se plantean derechos y obligaciones en forma mutua.

Como ello no sucede, es que plantean sus posiciones contradictorias ante el Poder Judicial, o eventualmente se formulan denuncias penales ante la Policía Nacional del Perú o ante el Ministerio Público.

Ante esta situación, que es constante en la realidad del país, es que surge el inconveniente de relacionar los dos factores que inciden de modo constante en el incremento de la violencia en el ámbito familiar: la regulación de la prestación de alimentos y el contexto de violencia familiar.

Sin tener en cuenta “cuál” problema es el que inicia el conflicto familiar, ambos son interdependientes y ello se expresa en la elevada cifra de violencia familiar en el país y es por eso que la primera razón por la cual los procesos de familia constituyen la mayor carga procesal en el país.

Una carga procesal que lamentablemente no es evaluada en un contexto superior y con ello se incrementan los casos de desatención de estos conflictos sociales y por ende se llegan a observar casos de feminicidio, violencia familiar a nivel de agresiones o casos de sustracción de menores o eventualmente casos de abandono material de familiares.

Por ello el estudio de los “alimentos” con los casos de “violencia familiar” resultan importantes en el estudio de la presente tesis, por cuanto nos permite detallar un factor importante que está centrado en el “proceso de alimentos”, el cual es deficiente tanto

en su estructura formal, sustantiva como procesal porque en esencia permite que el juzgado que inicialmente lo determina no pueda "ejecutar" su propia decisión y se deba recurrir al ámbito jurisdiccional penal para que se "cobre", el monto de los alimentos impuestos inicialmente.

Esta deficiencia del "sistema jurisdiccional" se debe al error del legislador que considera que "imponiendo una sanción penal" en el caso de la omisión de la prestación de alimentos, "soluciona" el problema material de los alimentistas y ello es un error garrafal, por cuanto el "obligado a prestar alimentos" si logra acreditar imposibilidad de pago elimina el "dolo" y con ello resulta imposible "aplicar la pena privativa de libertad".

Un defecto que ha provocado que el Proceso Penal en sí mismo, esté fracasando en el ámbito de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal por cuanto los fiscales al ejecutar el proceso de investigación y de formulación de la acusación penal, cuando conocen la denuncia ejecutada por el Juez que determinó la omisión de alimentos, debe "evaluar" las condiciones personales del "imputado del delito" (dado que ya estamos en una segunda etapa del proceso judicial, esta vez en sede penal)

En dicha evaluación, al acreditar condiciones de pago, condiciones laborales, condiciones económicas y la verdadera situación del "obligado a prestar alimentos", se determina que en esencia dicha persona "no puede cubrir los alimentos" determinados en la vía jurisdiccional inicial y que tampoco puede cubrir "los devengados generados por los alimentos determinados y no proporcionados" en la etapa jurisdiccional inicial.

Consecuentemente a esta situación es que el fiscal no formula acusación y ello parecería generar la sensación de indefensión material del alimentista pero que en esencia nos permite plantear que en casos “especiales”, los obligados a prestar alimentos no han logrado tener una defensa eficiente en el inicial proceso de alimentos seguido ante un juez de paz o ante un juez de familia o civil, si el proceso fue ante un Juzgado Especializado.

Situación que se presenta en forma constante en el distrito de Motupe, Provincia y Región de Lambayeque, donde actualmente laboramos y apreciamos esta realidad tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público y con ello surge un siguiente problema: ¿Quién atiende al alimentista?

Y esta cuestión surge porque de dos procesos judiciales (uno en vía civil o de familia y el segundo en el ámbito penal), no se llega a solucionar el problema material de la “prestación de alimentos” y con lo cual se genera una intervención jurisdiccional en la vía penal en forma ineficaz y sumamente onerosa, porque al final las “denuncias” llegan a ser archivadas.

Situación que nos permite plantear que en estos casos, el “delito de omisión a la asistencia familiar” es materialmente imposible de ejecutar y esto porque el “imputado” no logra ejecutar el “hecho típico y antijurídico” por el cual debería ser juzgado en la vía penal, con lo cual surge el planteamiento de su despenalización y exclusión de la legislación penal.

En este ámbito presentamos la investigación que nos permitirá exponer nuestro punto de vista en un Examen de Grado y así

obtener el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales.

La tesista.

ABSTRACT

In the field of the development of conflicts linked to the family environment in our society, we have observed that there are two linked constants that provoke the development of a much more complex and complicated context to solve, both because of the problems that they involve in the individual level. of family relationships as a social level, as the family breaks down and finally, in the field of public services by the State.

These two references are the processes of food and the processes of family violence that unfortunately are always complemented in contexts of families in crisis or in cases in which the "family" has not materialized, mainly due to the context in which it has been generated the interpersonal relationships.

Thus, the constant rule in these cases of families in crisis are the references to cases in which a "couple" has not managed to constitute a family and in those cases in which a "family" has disintegrated is because the personal factors of those who conformed it have changed and this has provoked a deep crisis that has finally determined by conditioning the behaviors and acts of the parties in this family conflict.

In this way, the context of family violence first arises or the problem of family maintenance arises, and in both cases the context is always one of "violence", as a constant element that increases to the extent that the parties they fail to effectively resolve their positions in the preliminary debate in which rights and obligations are raised in mutual form.

As this does not happen, it is that they raise their contradictory positions before the Judicial Power, or eventually criminal complaints are made before the National Police of Peru or before the Public Prosecutor's Office.

Faced with this situation, which is constant in the country's reality, there is the drawback of relating the two factors that consistently affect the increase in violence in the family: the regulation of food provision and the context of domestic violence.

Without taking into account "which" problem is the one that initiates the family conflict, both are interdependent and this is expressed in the high number of family violence in the country and that is why the first reason why family processes constitute the greater procedural burden in the country.

A procedural burden that unfortunately is not evaluated in a higher context and with this increase the cases of neglect of these social conflicts and therefore come to observe cases of femicide, family violence at the level of aggression or cases of child abduction or eventually cases of material abandonment of relatives.

Therefore the study of "food" with cases of "family violence" are important in the study of this thesis, because it allows us to detail an important factor that is focused on the "food process", which is deficient both in its formal, substantive and procedural structure because in essence it allows the court that initially determines it not to "execute" its own decision and must resort to the jurisdictional criminal jurisdiction to be "charged", the amount of food initially imposed .

This deficiency of the "jurisdictional system" is due to the error of the legislator who considers that "imposing a penal sanction" in the case of the omission of the provision of food, "solves" the material problem of the food and this is a blunder, because the "obliged to provide food" if it can prove inability to pay eliminates the "fraud" and thus it is impossible to "apply the penalty of deprivation of liberty."

A defect that has caused that the Criminal Process itself is failing in the scope of the validity of the New Code of Criminal Procedure as prosecutors to execute the investigation process and formulation of criminal charges, when they know the complaint executed by the Judge who determined the omission of food, must "evaluate" the personal conditions of the "accused of the crime" (given that we are already in a second stage of the judicial process, this time in criminal court)

In this evaluation, when accrediting conditions of payment, working conditions, economic conditions and the true situation of the "obligor to provide food", it is determined that in essence said person "can not cover the food" determined in the initial jurisdictional way and that neither it can cover "the accrued generated by the determined and not provided food" in the initial jurisdictional stage.

Consequently to this situation is that the prosecutor does not formulate accusation and this would seem to generate the sense of material defenselessness of the food but in essence allows us to argue that in "special" cases, those forced to provide food have failed to have an efficient defense in the Initial food process

followed before a justice of the peace or before a family or civil judge, if the process was before a specialized court.

Situation that occurs constantly in the district of Motupe, Province and Region of Lambayeque, where we currently work and we appreciate this reality both in the Judiciary and in the Public Ministry and with this the following problem arises: Who cares for the food?

And this question arises because of two legal proceedings (one in civil or family and the second in the criminal area), it is not possible to solve the material problem of "provision of food" and thereby generating a jurisdictional intervention in the criminal proceeding in an ineffective and highly onerous manner, because in the end the "denunciations" become archived.

Situation that allows us to state that in these cases, the "crime of omission of family assistance" is materially impossible to execute and this because the "accused" fails to execute the "typical and unlawful act" for which he should be tried on the road criminal, with which arises the approach of its decriminalization and exclusion of criminal legislation.

In this area we present the research that will allow us to present our point of view in a Degree Examination and thus obtain the Academic Degree of Master in Law with mention in Criminal Sciences.

The thesis

INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos la ejecución de la investigación de Tesis, sobre la base de la estructura preliminar contenida en el Proyecto de Tesis original, aprobado en junio del año 2017, por medio del cual se aprobó tanto el contenido inicialmente expuesto como también se atendió la observación formulada por el señor profesor Freddy Hernández Rengifo, en el sentido de detallar el alcance de la investigación (respecto del tipo de investigación), en el sentido de indicar referencia de trabajo de campo, que se expondrá en el capítulo segundo de la segunda parte de la investigación.

En tal sentido, la investigación ejecutada nos permite exponer un problema material que sucede en nuestra realidad nacional, sobre la base de una estructura metodológica siguiente:

- a)** El trabajo de investigación está dividido en “partes”, con lo cual se estructura un contenido específico en su interior, el cual permite “detallar” un aspecto puntual en la investigación.

En la primera parte, se expone el “problema” de la investigación y los aspectos iniciales que inciden en la ejecución de la investigación.

En la segunda parte, se expone el marco teórico, con lo cual planteamos el análisis de la bibliografía referencial y el estudio de campo ejecutado, para así poder detallar en el último capítulo el sustento de nuestra hipótesis de trabajo.

En la tercera parte, analizamos el estudio y debate de los elementos teóricos y de la realidad práctica estudiados.

En la cuarta parte, ejecutamos el detalle de los elementos metodológicos empleados en la ejecución de la investigación.

- b)** En el trabajo de ejecución del marco teórico, sostenemos que esta se ubica en la segunda parte del presente documento y está expuesto de la siguiente manera.

En el capítulo primero, ejecutamos el análisis preliminar de nuestro contexto social, cultural y familiar en el cual se desarrollan las relaciones familiares, sobre las cuales se desarrolla el “problema de la investigación”.

En el segundo capítulo, ejecutamos la exposición de los cuadros estadísticos de nuestra realidad, en particular los ubicados en tres niveles:

- i.** Estadísticas a nivel nacional, que nos permiten sostener que nuestra hipótesis puede tener un alcance superior, si se toma en cuenta que la realidad de Motupe, sólo representa un porcentaje equivalente a lo que se observa en la realidad nacional.

Las estadísticas han sido obtenidas de la página web del Poder Judicial, porque han sido detalladas por el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y son datos objetivos y que permiten ejecutar nuestra posición en la presente investigación.

- ii.** Estadísticas a nivel regional, toda vez que se ha ubicado información estadística de la propia Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

- iii.** Estadísticas ejecutadas como “trabajo de campo” en la propia localidad de Motupe, tanto a nivel de encuesta como a nivel de entrevista a magistrados (jueces y fiscales), como a abogados litigantes y a las mismas “personas” que conforman los casos de conflictos familiares (partes procesales) para así analizar el “contexto problemático” en un ámbito geográfico específico (variable geográfica)

El estudio del presente caso, nos permite exponer, entonces, el siguiente documento de Tesis.

PRIMERA PARTE

ANÁLISIS DEL OBJETO DE STUDIO

1. UBICACIÓN

Detallamos que la presente investigación es de carácter multidisciplinario, pero incide específicamente en las siguientes áreas del Derecho:

a) Derecho de familia.

En particular en el estudio de las siguientes instituciones:

- i. Derecho de alimentos.
- ii. Derechos y obligaciones parentales.
- iii. Violencia familiar.
- iv. Procesos judiciales en la especialidad de derecho de familia.

b) Derecho Penal.

En especial en el estudio del “delito de omisión de asistencia familiar”¹, el cual es en esencia el punto medular de nuestra investigación y sobre la cual se plantea la despenalización de

¹ PRADO SALDARRIAGA, Victor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. IDEMSA. Lima-Perú. 2010

este delito, en casos en los cuales el obligado no pueda cubrir esta obligación, porque consideramos que esta "condición" debe estar detallada en el proceso de alimentos y no en la vía penal.

c) Derecho Constitucional.

Principalmente para fundamentar nuestra posición en la despenalización del delito de omisión a la asistencia familiar, toda vez que la "condena penal de pena privativa de libertad"² no soluciona el problema material y real del alimentista y con ello surge el inconveniente de que su "derecho" se disipa en los casos en los cuales el obligado a prestar alimentos es condenado a una carcelería, con la cual la "obligación" ya resulta imposible de atender.

d) Derecho Procesal.

Principalmente porque la realidad en estudio no ha sido evaluada ni estadísticamente ni teóricamente en el ámbito procesal y por ello el estudio de campo en la presente tesis nos permite sustentar nuestra posición.

e) Derecho Civil.

Debido a la interrelación temática con el Derecho de Familia y con el Derecho Penal, como ejes centrales en la presente tesis.

² SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Editorial Iustitia. Quinta Edición. Lima-Perú. 2013

f) Sociología jurídica.

Debido al análisis de elementos sociales y culturales que inciden en la “realidad de la familia” en el país, factor que nos permite detallar algunos aspectos que resultan imposibles de ubicar en el ámbito bibliográfico y que son constantes en el ámbito jurisdiccional.

En este contexto es que la asesoría de nuestro profesor Miguel Arcángel Arana Cortez, resulta sumamente importante porque el diseño de las encuestas, de las entrevistas y del modo en el cual se sustenta nuestra posición, nos permite plantear la Tercera Parte de la Tesis en la cual sustentamos nuestra posición crítica contra la legislación penal, en particular contra el “delito de omisión a la asistencia familiar”, el cual resulta disfuncional e ineficaz, por cuanto en Motupe la principal característica social y familiar es la pobreza endémica que prácticamente limita el contexto de la ejecución de la prestación de alimentos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, en el Poder Judicial en la mayoría de Distritos Judiciales en el país se puede observar una situación especial y muy particular: los expedientes judiciales que generan la mayor carga procesal tratan sobre el Delito de Omisión a la Asistencia familiar.

En el ámbito del distrito de Motupe, en la Provincia y Región de Lambayeque, este “proceso judicial” es el proceso excluyente en términos numéricos en la zona de estudio.

Esta realidad incide sobre todo en dos jurisdicciones especiales: la jurisdicción civil o de familia, porque en Motupe no hay Juzgados Especializados en Familia. Una situación crítica si tomamos en cuenta que la región de Lambayeque, sólo hay sies juzgados de familia en toda la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a pesar de la sobre carga judicial en estas “materias”.

En esencia, en Motupe, los jueces de paz letrados se ocupan de atender la mayor carga procesal de sus despachos en procesos de alimentos (i) y de violencia familiar (ii), por cuanto estas son las materias de mayor presencia estadística.

La vinculación de este factor con el contexto jurisdiccional en general es importante³ porque nos permite detallar el “modo” en el cual se diseñan los niveles de atención jurisdiccional a casos específicos y nos permite detallar la inexistente comunicación interna en el ámbito jurisdiccional para atender un único problema: el conflicto familiar vinculado a la mala relación entre dos progenitores respecto de la atención y manutención de los hijos dependientes.

En este punto, detallamos que la línea central de la presente Tesis está centrado en casos de “prestación de alimentos a hijos dependientes”, por cuanto esto los “alimentos” pueden ser

³ PLACIDO, ALEX. Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Instituto Pacífico. Lima-Perú. 2010.

planteados por “progenitores de tercera edad” y por “ex cónyuges o parejas en situación de abandono material”.

Un punto de detalla que merece ser detallado en forma inicial por cuanto las estadísticas nos permiten detallar esta referencia, en particular en el caso de Motupe y por *inferencia* podemos extender estos resultados a una realidad nacional, por cuanto la “realidad social y familiar” peruana no es diferente a lo que se aprecia en Motupe.

De este modo surge la relación entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal⁴, en la cual se generan dos procesos judiciales respecto de un “mismo problema”, provocando el incremento de costos económicos en la atención de un “trámite judicial” que no ha sido correctamente evaluado por el legislador y por la administración jurisdiccional⁵.

Un factor sumamente importante de análisis porque “el problema de los alimentos” no sólo repercute en la ineficiencia del sistema jurisdiccional en este punto sino que se extiende a otros ámbitos jurisdiccionales y esto es porque al final, tanto jueces como fiscales en el ámbito penal deben avocarse a un “proceso judicial” en una especialidad donde el contenido material de los hechos es de naturaleza familiar y ahí está el inconveniente del sistema jurisdiccional en su conjunto.

⁴ HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Procesos judiciales derivados del derecho de familia. Iustitia. Lima- Perú. 2017.

⁵ AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Gaceta Civil & Procesal Civil N° 05. Alimentos: principales controversias a nivel judicial. P. 13-27. Lima-Perú. Noviembre, 2013.

La elevada carga procesal, el elevado incremento de gastos económicos y humanos en la atención a un problema que en esencia corresponde a otra vía jurisdiccional incide negativamente en la práctica jurisdiccional y esto nos permite plantear nuestra posición frente al problema de estudio.

Esto es, a pesar de tener un contexto criminológico sumamente complicado con el incremento de la delincuencia en el país, a pesar de la existencia de muchos elementos de corrupción en la Administración Pública, el Poder Judicial prácticamente destina muchos recursos (humanos, logísticos, administrativos) en la atención de un problema social que proviene de una jurisdicción diferente (jurisdicción en la especialidad familiar y eventualmente jurisdicción en la especialidad mixta) y en la cual la tutela de un derecho fundamental a favor de una persona que lo requiera, no es garantizada.

De este modo, los jueces penales deben analizar un Expediente que cuenta con una sentencia firme en otra jurisdicción que detalla tanto los derechos del alimentista como la obligación del prestador de alimentos y que lamentablemente provoca la ineficiencia de todo el sistema jurisdiccional porque para ejecutarse el “cobro” de dicha obligación, se acude a la jurisdicción penal.

Esta situación nos permite analizar varios elementos de estudio, como por ejemplo:

- a)** La funcionalidad del sistema jurisdiccional respecto de la tutela de los alimentos y del propio nivel de eficiencia de una sentencia judicial, por cuanto esta no logra ser cumplida por una parte.

¿Cuál es la razón específica para que los jueces civiles o de familia o jueces de paz letrados **no puedan ejecutar la obligación contenida en la sentencia que impone una pensión de alimentos a una parte demandada?**

Como se podrá observar, este punto incide específicamente en el “procedimiento” regulado por ley y nos permite plantear el hecho material de que el “obligado” a prestar alimentos no siempre tiene una buena defensa material y esto se debe sobre todo al elevado contexto social y cultural de violencia que se evidencia en un distrito como el de Motupe.

- b)** El contexto socio económico y familiar en crisis de nuestro país, por cuanto la carga procesal en la atención de estas carpetas fiscales son sumamente elevadas en la mayoría de Distritos Fiscales en el país⁶.

Los fiscales cuando deben evaluar el contexto de la persecución de un delito, deben ejecutar el estudio del “imputado” y demostrar que este ha ejecutado una “acción típica y antijurídica” para así acreditar una conducta dolosa.

En Motupe, esta situación no se alcanza a materializar porque los imputados no cuentan con medios económicos suficientes para poder cubrir sus obligaciones alimentarias y

⁶ MATOS GIBSON, Noyli. Relación entre autoestima y actitudes hacia la violencia familiar en mujeres. P. 135-147. En: Avances en Psicología. Volumen 5, N° 1. Lima-Perú. 2007.

ello incide en su “capacidad para cometer un delito”, el cual no se concreta porque no hay evidencia de un “dolo”.

- c) La ineficiencia del sistema penal para la atención de casos de emergencia criminológica, como por ejemplo la represión de la delincuencia y del tratamiento de delitos contra la Administración Pública, por mencionar algunas referencias.

En este punto, sustentaremos que el Estado ejecuta un gasto muy oneroso en la atención a un “problema penal” de incidencia menor, al no acreditarse la responsabilidad penal del imputado, con lo cual se destinan recursos económicos, humanos y logísticos en forma innecesaria, frente al contexto criminológico que está en aumento.

Bajo este panorama, como elemento preliminar, se detalla que estamos ante la acreditación de una situación en la cual co-existen dos jurisdicciones que actúan en forma complementaria, factor que resulta disfuncional para el propio sistema de impartición de justicia en el país y que eventualmente limita el tratamiento punitivo en la prestación de alimentos porque la intervención penal del Estado, resulta desproporcionada.

Consecuentemente, no atiende el derecho fundamental inicialmente planteado: los alimentos y este punto nos permite plantear la despenalización del delito de omisión de asistencia familiar, porque resulta inejecutable su persecución, en casos específicos debido a la capacidad económica del obligado.

Hacemos énfasis que esta realidad está focalizada en la realidad de Motupe y por ello es necesario detallar que la realidad económica,

social y familiar de nuestra zona de estudio resulta fundamental en la exposición de nuestra posición frente al tema de estudio.

Complementariamente a lo expuesto, se debe señalar que la insuficiencia del modo en que el “derecho de alimentos” se desarrolla en el ámbito jurisdiccional⁷, respecto a la identificación de los obligados a prestar dicha prestación, se debe señalar que estos sujetos generalmente no cuentan con recursos económicos suficientes que garanticen dicha obligación, lo cual prácticamente cuestiona la naturaleza e intervención del Derecho Penal en estas instancias.

Este punto se detalla en forma objetiva en el Segundo Capítulo de la Segunda Parte.

Referencialmente, esta realidad en estudio, nos permite plantear la cuestión: Los jueces de paz letrados o jueces especializados en familia o civil, ¿Realizan un buen análisis del perfil económico del obligado a prestar alimentos? o esencialmente estos jueces ¿Acatan el petitorio formulado por las partes demandantes, sin tomar en cuenta la realidad económica del demandado?

3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

Ante esta situación, planteamos esta cuestión que nos permitirá determinar la hipótesis en la presente investigación.

⁷ FERNÁNDEZ VALLE, Mariano. El acceso a la justicia de los sectores en desventaja económica y social. En: BIRGIN, Haydée y KOHEN, Beatriz (compiladoras). Acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: Biblos, 2006. Pp. 39-58.

¿Se puede plantear la despenalización del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en mérito a su ineficacia en la tutela del derecho fundamental a recibir alimentos?

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Justificamos la presentación del presente proyecto de tesis en base principalmente a que trabajamos en una dependencia judicial del Poder Judicial en el distrito de Motupe y a diario observamos que la mayor carga procesal en nuestra institución es el trámite de procesos de Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y no logramos atender el verdadero problema que asume el “alimentista” con la ejecución de un proceso judicial que no atiende la prestación de los alimentos (como derecho).

Esta situación se genera, porque el imputado en la comisión del delito no cuenta con las condiciones materiales para proporcionar alimentos y esto en función a que no fue correctamente evaluada la demanda de alimentos (juzgado civil o de familia o juzgado de paz letrado) y que finalmente provocó en el incumplimiento de pago (i), la generación de devengados (ii) y en la omisión de alimentos como delito (iii).

Que esta situación prácticamente ha provocado que la jurisdicción penal sea una “jurisdicción complementaria” al proceso civil y de familia en la cual se cobra alimentos, provocando que el “derecho material de alimentos” prácticamente sea garantizado en la vía penal en un tiempo excesivamente prolongado a cuando surgió el derecho vulnerado (omisión a prestar alimentos)

El panorama contextual e institucional en el Poder Judicial ante este problema, nos permite justificar esta propuesta en el presente proyecto de tesis, el cual tiene como elemento de caracterización, la necesidad de vincular el proceso civil y de familia a niveles de mayor eficiencia, por cuanto de por medio esta la propia subsistencia del alimentista.

5. OBJETIVOS.

a) Objetivo General.

Investigar el contexto jurisdiccional en el cual un derecho fundamental como el derecho a recibir alimentos no puede ser atendido en forma eficaz en una única vía e instancia judicial y se debe recurrir a la vía jurisdiccional penal para la atención inmediata de un derecho reconocido y regulado en una sentencia judicial en una vía jurisdiccional anterior.

b) Objetivos específicos.

- i.** Estudiar la funcionalidad de la jurisdicción penal en la atención de un delito considerado de menor impacto criminológico frente al contexto social actual, en donde se observa el incremento de la delincuencia.
- ii.** Determinar la posibilidad de despenalizar el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la legislación penal peruana, en los casos de alimentos.
- iii.** Determinar la posibilidad de facultar a los jueces civiles o de familia o jueces de paz letrados para puedan ejecutar

la obligación contenida en la sentencia que impone una pensión de alimentos.

SEGUNDA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL MARCO TEÓRICO DE LA TESIS

1. ANTECEDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Al momento de la recopilación de información referencial sobre el tema en investigación, se hizo una búsqueda en las siguientes áreas:

- a)** Ejecutabilidad de decisiones judiciales, esto para analizar el aspecto procesal en el trámite de un expediente.
- b)** Análisis del derecho de familia, específicamente en el tema de alimentos.
- c)** Análisis de la funcionalidad del servicio de justicia como obligación institucional del Estado, y
- d)** Tutela de bienes jurídicos importantes en la sociedad por medio del poder punitivo estatal.

En la conjunción de estos temas y consultando con especialistas en derecho de familia, como el profesor Miguel Arcángel Arana Córtez Tapia, nos manifiesta que existen muchos elementos que no han sido desarrollados correctamente ni por la ley ni por la propia doctrina y por eso el sistema jurisdiccional de familia es ineficiente en la tutela de derechos de los ciudadanos que acuden a dicha vía.

Ante esta situación confirmamos que no existen trabajos previos que tengan una vinculación con el tema pro puesto y ello nos permite sostener la importancia de la propuesta en base a su novedad temática.

2. MARCO TEÓRICO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN.

Se desarrolla el siguiente texto en función a la bibliografía compilada como también al estudio de campo en la cual se plantean los "capítulos" que permiten sustentar el análisis del "contexto problemático" en evaluación en la cual se configuran el "problema" y sobre la cual se plantea en el último capítulo la "hipótesis" de la presente tesis.

CAPÍTULO I.

EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO PRELIMINAR EN EL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE LA PRESENTE TESIS

1.1. LA REALIDAD DE LAS RELACIONES DISFUNCIONALES EN EL ÁMBITO FAMILIAR EN EL PAÍS.

Se debe detallar que las relaciones familiares, que configuran:

a) Relaciones matrimoniales.

Aquellas parejas que han asumido el compromiso personal y mutuo de “casarse” y registrar dicha unión en el Registro Civil de la Municipalidad de Motupe o en un municipio del país y que nos permite identificar a la “familia” más tradicional en nuestro ámbito de estudio.

b) Relaciones convivenciales.

Parejas que sin tener impedimento matrimonial ejecutan una convivencia pacífica que complementa:

- i.** Un período de tiempo superior a los dos años.
- ii.** Una vocación de permanencia en el tiempo⁸.

⁸ AGUILAR, Benjamín. Claves para ganar los procesos de alimentos: un enfoque aplicativo de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima-Perú.

- iii.** Una condición “pública” en cuanto a la determinación y configuración de la “pareja”.
- iv.** Una residencialidad en un hogar configurado y que resulta identificable socialmente.

Factores que incidirán materialmente en los puntos en evaluación en el Capítulo II de la presente tesis.

c) Relaciones convivenciales impropias.

Son las que usualmente se establecen en el ámbito de la imposibilidad de una “vida en común” por la existencia de un impedimento legal, que generalmente se debe a que uno de los integrantes de la pareja registra una condición de matrimonio pre existente a la relación con su pareja, al estar casado con una “mujer” de quien no se ha divorciado⁹.

d) Relaciones de pareja.

Las cuales se establecen generalmente en el ámbito de las relaciones juveniles y de adolescentes, en donde se evidencia que “personas dependientes económicamente” de sus progenitores asumen una vida sexual que provoca el nacimiento de “hijos” sobre quienes no se cuenta una condición estable en lo económico y mucho menos en lo estable a nivel de personalidad.

⁹ ALAYZA MUJICA, Rosa. Conflictos sociales. ¿Tierra de nadie o tierra de muchos? P. 5-9. En: Coyuntura, Nº 24, mayo-junio. Lima-Perú. 2009.

Los procesos judiciales ejecutados tomando en cuenta esta realidad son menores que en los otros casos y se debe a que las madres adolescentes o juveniles no saben como ejecutar la defensa de sus derechos y por ello inciden en el inicio de estos procesos cuando los obligados ya cuentan con “nuevas obligaciones económicas” que asumen y que condiciona negativamente en el cumplimiento de los alimentos¹⁰.

e) Relaciones sexuales esporádicas.

El elevado número de “demandas” de alimentos que no logran ser ejecutadas en cuanto a la obligación del demandado a “cumplir” con su obligación se debe a que los “demandados”, suelen cambiar de lugar de residencia.

En términos directos, en este tipo de situaciones, la pareja sólo ha tenido una relación sexual y producto de la misma es que ha surgido un embarazo y un posterior parto.

Ello “provoca” como consecuencia una referencia importante: el cambio de domicilio del “presunto padre” y como característica general se observa que estos “demandados” ya no residen en Motupe y las condiciones para ejecutar las demandas de alimentos no logran ser eficaces porque no existe una condición objetiva que permita cumplir los fines del proceso judicial.

¹⁰ BURGOS, Juan Manuel. Diagnóstico sobre la familia. Edición Palabra. Madrid-España. 2004.

Esta realidad, lamentablemente no ha sido detallada en ninguna bibliografía estudiada y se debe a que el estudio se ha centrado en elementos teóricos y no prácticos.

1.1.1. LA REALIDAD DE LAS RELACIONES DISFUNCIONALES EN EL ÁMBITO FAMILIAR EN MOTUPE, COMO ZONA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO.

Se detalla que este punto será extensamente analizado en el Capítulo II de la presente Tesis.

Se señala en forma autónoma este punto para así poder vincular la “realidad” de la zona de estudio respecto de su incidencia en el ámbito material de la realidad nacional y de la realidad de Lambayeque, como región de referencia.

Se señala este punto, en función a su utilidad práctica.

1.2. EL CONTEXTO DE LOS CASOS MÁS REFERENCIALES EN EL ÁMBITO DE LA CRISIS FAMILIAR.

Debido a una complementación de contextos sociales, económicos, culturales y familiares, es posible ubicar en la jurisprudencia peruana, una serie de procesos judiciales muy vinculados al contexto de la crisis familiar y por ello es posible determinar los siguientes procesos¹¹:

¹¹ CERVILLA GARZÓN, María Dolores. La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial. Jerez de la Frontera: Universidad de Cádiz, 1997.

a) Procesos judiciales en materia de derecho de familia.

- i.** Procesos vinculados a la determinación de una obligación de alimentos.
- ii.** Procesos vinculados a la suspensión, variación o exoneración de alimentos.
- iii.** Procesos de ampliación de la cuota alimentaria.
- iv.** Procesos vinculados a la determinación de la tenencia de los hijos, sobre la cual no se definen elementos de naturaleza constitucional o referencial en torno al Título Preliminar de Código Civil y Código Procesal Civil¹².
- v.** Procesos vinculados al ámbito de un régimen de visitas de los progenitores sin tenencia a favor de tener contacto con sus hijos.
- vi.** Procesos vinculados al ámbito de la separación de los progenitores.
- vii.** Procesos vinculados a la liquidación de la sociedad de gananciales.
- viii.** Procesos vinculados al ámbito de la suspensión de la cohabitación (separación de cuerpos)

¹² ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984. PUCP. Lima-Perú. 2005.

- ix.** Procesos vinculados al ámbito de la determinación de una cuota alimentaria entre cónyuges o ex cónyuges¹³.

b) Procesos judiciales en el ámbito civil.

- i.** Procesos judiciales vinculados a la determinación de una sucesión.
- ii.** Procesos judiciales vinculados a la división y participación de bienes en una sucesión intestada.
- iii.** Procesos de anulación de la sucesión intestada, por existir nuevos “demandantes” o “impugnación de la división y participación de los bienes” en una etapa previa a la determinación judicial.

c) Procesos judiciales en materia penal.

- i.** Procesos judiciales vinculados a casos de violencia familiar¹⁴.
- ii.** Procesos judiciales vinculados a la sustracción de hijos por parte del progenitor sin derecho de tenencia o custodia¹⁵.

¹³ MATOS GIBSON, Noyli. Relación entre autoestima y actitudes hacia la violencia familiar en mujeres. P. 135-147. En: Avances en Psicología. Volúmen 5, N° 1. Lima-Perú. 2007.

¹⁴ CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. Violencia de género, justicia restaurativa y mediación. Madrid, La Ley.2011. Pp. 245

¹⁵ GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal. Lima-Perú. Jurista Editores. 2013. Pp. 275.

- iii. Procesos judiciales de “omisión de asistencia familiar”¹⁶, los cuales son evaluados en forma mucho más directa en la presente tesis.

Como se podrá observar la “realidad familiar” en el país es un elemento que no ha sido analizado en forma detallada y nos permite plantear la importancia de la presente tesis.

1.3. EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO JURISDICCIONAL EN LA ESPECIALIDAD CIVIL O DE FAMILIA.

A efectos de identificar el “contexto problemático” a ser detallado en la presente tesis, en el presente sub punto y en el siguiente se evaluarán los “procesos judiciales” que inciden en la “prestación de alimentos a cargo de un obligado” y nos permitirán detallar la existencia de dos procesos judiciales que actúan en forma complementaria y secuencial, sobre la cual detallamos este punto para enfatizar el objetivo general de nuestra investigación.

En el ámbito jurisdiccional civil o de familia, conforme se ha expuesto en el punto precedente, nos permite detallar que existen “múltiples procesos judiciales” vinculados a la evaluación y determinación de los derechos y obligaciones de las partes en un conflicto familiar¹⁷.

En este contexto, es posible identificar:

¹⁶ SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Editorial Iustitia. Quinta Edición. Lima-Perú. 2013.

¹⁷ CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES Estadísticas por especialidad de familia del 2017. Casos recurrentes. Recuperado el 18/05/2017 de: www.pj.gob.pe/cij

- a)** Una situación independiente del “modo” en que las personas se relacionan o generan “una condición familiar”¹⁸.

En este sentido, se debe señalar que sin importar el contexto matrimonial, convivencial, convivencial impropio o de pareja situacional en el tiempo, las personas que procrean “un hijo” se convierten en obligados a prestar alimentos a esta persona, porque no puede subsistir de forma autónoma y el derecho y obligación resultan vinculantes.

- b)** Una situación en la cual el contexto social, económico y cultural incide sobre manera.

Así se debe detallar que en Motupe el machismo es un problema de características generales en la todo el distrito y permite graficar una realidad en la cual muchos varones tienen “varios hijos” con diferentes mujeres y en múltiples casos omiten la prestación de alimentos en todos estos casos porque no tienen un trabajo estable en el tiempo.

Igualmente el carácter de los trabajos informales y sub valoradores incide materialmente en la “cuota alimentaria” la cual no puede garantizar un cuidado y atención debida a los hijos, porque el monto económico es sumamente inferior a las “necesidades” del alimentista.

¹⁸ MATOS GIBSON, Noyli. Relación entre autoestima y actitudes hacia la violencia familiar en mujeres. P. 135-147. En: Avances en Psicología. Volúmen 5, N° 1, 2007.

- c)** Un contexto socio económico y cultural que incide en las relaciones familiares¹⁹, por cuanto las “familias maternas” suelen asumir el cuidado y custodia de los hijos menores de edad, principalmente cuando el “obligado a prestar alimentos” ya no reside en Motupe o no cumple con su obligación o la “madre”, asume un trabajo fuera del distrito de Motupe para así solventar los gastos que implican el cuidado de un hijo.
- d)** El contexto laboral vinculado a la agricultura y al trabajo económico limitado es un factor que incide en los niveles de pobreza de la región que finalmente se expone en las siguientes condiciones:
- i.** No hay acceso de calidad a los servicios de salud en Motupe.
 - ii.** No existen programas de atención a una planificación familiar idónea en Motupe y ello incide en la elevada tasa de fertilidad en mujeres jóvenes o adolescentes en el distrito.
 - iii.** No existen programas de atención de “emergencia” en caso de prevención de una concepción porque las farmacias en Motupe no venden las “pastillas del día siguiente”, principalmente porque existe una elevada referencia social y cultural que cuestiona esta venta por parte de las farmacias de la localidad.

¹⁹ LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Compendio de derecho de familia. Madrid, Dykinson. 2013.

Esta referencia se desprende de las entrevistas ejecutadas a las partes demandantes de alimentos a quienes se les consultaban porque no habían “tomado la pastilla del día siguiente” y la gran mayoría detalló que estas no son vendidas en el distrito.

- iv.** Existe una elevada referencia de casos de abuso sexual, que no son denunciados y por eso existen muchas madres que no saben a quien “demandar” por la pensión de alimentos, y estos casos se deben principalmente a casos de violación sexual y de casos de relaciones sexuales en situación de embriaguez a la salida de las fiestas comunales o fiestas en discotecas.

1.4. EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO JURISDICCIONAL EN LA ESPECIALIDAD PENAL

Sobre lo expuesto en el punto precedente, este punto nos permite detallar un factor importante: la crisis familiar en el ámbito de la realidad ²⁰ de la zona de estudio nos permite evaluar algunos aspectos problemáticos en lo penal y estos son:

- a)** El registro de muchos casos de violencia familiar.

Situación que grafica una serie de procesos y casos específicos, como:

²⁰ PODER JUDICIAL. Reforma judicial: evaluación y perspectivas de desarrollo. Lima, Poder Judicial. 1998.

- i.** Casos de violencia familiar a nivel de maltrato físico.
 - ii.** Casos de violencia familiar a nivel de maltrato psicológico.
 - iii.** Casos de violencia familiar a nivel de maltrato y condicionamiento económico, principalmente expuesto en casos de chantaje sexual o dependencia alimentaria por parte del obligado a prestar alimentos en contra de la madre del dependiente alimentista²¹.
- b)** El registro de casos de violencia familiar en el ámbito de las relaciones con la familia de la persona que reclama los alimentos.

Una situación que nos permite detallar los casos en los cuales se registra:

- i.** La vivienda de la “familia en crisis” es una vivienda multifamiliar de propiedad de los abuelos del “alimentista”²².
- ii.** Una vivienda en la cual los conflictos familiares se evidencia en diferentes ámbitos, tanto en el interior de la “familia en crisis” como con respecto de otros integrantes de la familia, generalmente los suegros del

²¹ REGGIARDO SAAVEDRA, Mario. Aproximaciones a la litigiosidad en el Perú. P. 223-234. En: Themis, Época 2, N° 62. Lima-Perú. 2012

²² UGARTE UBILLUZ, Dora. Relación entre la estructura familiar y la salud mental de la familia: un asunto de límites internos. En: Derecho PUCP. Volumen 21, N° 140. Lima-Perú. Agosto 1996.

obligado a prestar alimentos y que incide en la violencia familiar entre los hijos o hermanos de la pareja del obligado a prestar alimentos y que se expone en los casos de peleas físicas entre estas personas²³.

Como se podrá observar, se expone un contexto sumamente complicado y complejo de evaluar y que no está expuesto en el ámbito de la bibliografía empleada porque estos estudian casos de la teoría y que no logran explicar el funcionamiento de la “familia” en la actualidad.

Por ello el estudio de casos puntuales en el ámbito de la realidad de Motupe nos permite exponer nuestro punto de vista.

1.5. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL CONTEXTO PRELIMINAR A LA EJECUCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.

Cuando se analiza el contenido material del artículo 481º del Código Civil, se pueden observar tres elementos complementarios que inciden en la calificación del “delito” como “hecho típico y antijurídico”:

a) Factor “A”: Las necesidades de quien requiere “alimentos”.

b) Factor “B”: las posibilidades del que debe prestar “alimentos”.

²³ RENTERÍA DURAND, María Margarita. Las medidas cautelares: en el derecho de familia. Lima, Ediciones Jurídicas. 2012. Pp. 73

c) Factor “C”: las circunstancias en las cuales se relacionan los progenitores.

Y paradójicamente estos elementos no resultan evaluados en el ámbito de la evaluación del artículo 149º del Código Penal, que regula el delito de omisión de asistencia familiar.

Particularmente consideramos que este punto es el elemento principal que incide en la baja condicionalidad para “evaluar la prestación de alimentos” y el pésimo trámite que se ejecuta en el seguimiento de dos procesos judiciales que evalúan el “mismo problema material”: la prestación de alimentos.

Así, la omisión de estos elementos nos permite detallar que la incidencia de los casos expuestos en el presente capítulos resultan “complementarios” entre las jurisdicciones civiles o de familia con el ámbito jurisdiccional penal²⁴.

Un error del propio sistema de impartición de justicia que lamentablemente incide en el pésimo sistema de justicia en el país y que proviene del error material del legislador.

Así ubicamos como el principal responsable de este contexto negativo al legislador por cuanto no ha tomado en cuenta que el alimentista lo que requiere es la “prestación de alimentos” no que

²⁴ TORRES CARRASCO, Alberto. Patria Potestad, tenencia y alimentos. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2014. Pp. 221

el progenitor obligado a prestarlo esté preso, porque ello no soluciona su problema, más bien lo amplía en forma negativa²⁵.

Un defecto que la doctrina en general reproduce en forma constante y que salvo algunos trabajos de especialistas en la materia nos permiten detallar este factor.

En este punto, se señala que nuestro asesor en la ejecución de la tesis es el especialista en la materia en evaluación que se opone a toda la doctrina y lo ha expuesto en una serie de publicaciones, todas ellas de alcance nacional, como en las Revistas de Gaceta Jurídica, con lo cual su posición no puede ser desconocida, más aún cuando en la región de Lambayeque se sigue una tradición teórica muy deficiente y amplificadora de los errores teóricos de los tratadistas de Lima.

²⁵ VARSI, Enrique (2011) Jurisprudencia sobre derecho de familia. Lima, Gaceta Jurídica

CAPÍTULO II.

EL ANÁLISIS CASUÍSTICO EN EVALUACIÓN.

Se detalla el “estudio de campo” en la presente investigación en la redacción de los resultados de:

- a)** Ejecución de encuestas formuladas, bajo el siguiente alcance.
 - i.** Encuesta a los jueces y fiscales del distrito de Motupe, que en total suman 9.
 - ii.** Encuesta a las “partes procesales” en procesos en trámite en la vía civil o de familia y en la vía penal.
 - iii.** Encuestas a abogados que participan en el ámbito jurisdiccional en la localidad de Motupe.
- b)** Ejecución de entrevistas a especialistas en las materias evaluadas, las cuales se han desarrollado vía correo electrónico.

Los entrevistados han sido:

- i.** Moisés Paz, profesor de la PUCP, especialista en procesos penales y litigación oral.
- ii.** Juan Fuentes Véliz, profesor de la Universidad San Martín de Porres, especialista en temas de gestión pública en particular en políticas jurisdiccionales.

- iii.** Enrique Varsi Rospigliosi, a quien se le ubicó en su red social del “Facebook” y amablemente respondió nuestras preguntas.

El profesor Varsi es profesor de la Universidad de Lima y de la UNMSM y es un reconocido especialista en Derecho de Familia.

- iv.** Emilia Bustamante Oyague, a quien también se le ubicó en su red social del “Facebook” y es actualmente Juez de la Corte Suprema de Justicia, a quien se le consultó sobre el procedimiento judicial seguido en los temas en evaluación y ha accedido a responder las preguntas por “inbox” del Facebook.

Se detalla esta referencia a efectos de poder validar la información expuesta y que nos ha permitido sustentar nuestra posición tanto en la redacción de la hipótesis como en la determinación de las conclusiones como de las recomendaciones.

- c)** Se ha ejecutado un estudio de casos en la localidad de Motupe en los años 2015-2016-2017, período en el cual se ejecuta la presente investigación.

Igualmente se han ubicado estadísticas vinculadas a los ámbitos temáticos evaluados en la Corte Suprema de Justicia de la República y en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Consideramos que el trabajo de campo nos permite no sólo validar la importancia del tema en estudio sino que además nos permite ejecutar una investigación que no ha sido expuesta en la doctrina nacional y que nos permite aportar un elemento novedoso en el ámbito de las investigaciones de Tesis.

2.1. RESPECTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES COMO CONTEXTO PRELIMINAR DE ESTUDIO.

Se señala que para el caso del estudio de una casuística a nivel nacional, se hace referencia del siguiente cuadro del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República para el año 2014.

Corresponde señalar que no existen mayores estudios o estadísticas al respecto y que dicho año es importante a detallar porque por primera vez se configura que la “especialidad de familia” constituye la mayor carga procesal en el Poder Judicial.

En este sentido, no se observan estudios similares en los años del período de estudio propuesto y esto ha sido confirmado por la Juez de la Corte Suprema de Justicia, Emilia Bustamante Oyague, quien detalló que esta situación se debe principalmente a que no existen “estudios específicos” que analicen la carga procesal en el Poder Judicial.

Así el registro detallado por “casos judiciales” es el siguiente:

Cuadro N° 01²⁶:

Materias vinculadas a procesos judiciales en casos de familias en crisis.

N°	Materias	Porcentaje del 37.4%
1	Alimentos	37.6%
2	Violencia familiar	34.7%
3	Divorcio por causal	5.3%
4	Ejecución de acta de conciliación	2.4%
5	Separación convencional, Divorcio ulterior	2.3%
6	infracción contra el patrimonio, tenencia, filiación, abandono material, peligro moral y maltratos, filiación extramatrimonial, interdicción, declaración judicial de paternidad extramatrimonial, infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, régimen de visitas, infracción contra la libertad sexual, adopción, disposición de bien de menor, otras causas	17.7%

Este cuadro nos permite detallar los siguientes elementos:

²⁶ DOCUMENTO DE TRABAJO. Consultoría a favor de la Academia de la Magistratura, período de evaluación 2013-2014, financiado por el Banco Mundial en su programa a las Políticas de Reforma del Sistema de Justicia. Evaluación de book case para difusión y capacitación en temas judiciales a los operadores de justicia. Especialidad: Derecho de Familia, director del área: Mag. Manuel Bermúdez Tapia. Coordinadora del proyecto en general: Xaviera Pérez. 2014.

- a)** La mayor carga procesal en todo el Poder Judicial, en todas sus instancias y niveles jurisdiccionales está vinculado a casos seguidos en “familias en crisis”.
- b)** La mayor “carga procesal” específica en el Poder Judicial detalla la referencia de “pensiones de alimentos” y esto es vinculante con la realidad de Motupe donde se aprecia la misma realidad.
- c)** Los casos de violencia familiar siempre están vinculados al contexto de omisión o limitación económica en la prestación de los alimentos.
- d)** No existen estudios que ejecuten el análisis detallado de los “casos” en la etapa posterior al proceso judicial, con lo cual no se sabe con exactitud si se “cumplió” con la sentencia judicial o cómo esta la realidad familiar.
- e)** Existe una baja tasa de “procesos vinculados al trámite de un divorcio” y esto es porque las partes se “separan pero no ejecutan en forma inmediata o automática el trámite para delimitar sus derechos u obligaciones o la determinación de la sociedad de gananciales y esto es lo que en el tiempo incide en la ampliación del problema en la familia en crisis.

Como se podrá observar, esta realidad es la que nos ha permitido ejecutar la presente investigación porque este es el verdadero contexto material en la cual iniciamos el estudio del problema de estudio.

2.2. EL ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE LA REALIDAD DE MOTUPE EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL EN LOS TEMAS DE ESTUDIO.

El estudio casuístico de la realidad de Motupe nos ha permitido detallar las siguientes referencias:

Cuadro N° 02:

Contexto judicial.

Nº	Ítem	Poder Judicial	Ministerio Público
01	Nº de magistrados	03 jueces	01 fiscal 04 fiscales adjuntos
02	Nº de personal jurisdiccional de apoyo	08 personas	10 personas
03	Nº de personal administrativo de apoyo	02 personas	03 personas
04	Nº de locales institucionales	02 locales	01 local

Esta información nos permite detallar algunos aspectos importantes:

- a)** Tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público se observa un personal insuficiente para atender la carga procesal en el distrito.

- b)** Sólo un juez y dos fiscales son magistrados titulares.
- c)** El personal de apoyo, que no se “registra formalmente” es un personal de apoyo técnico y jurisdiccional muy importante pero que no es remunerado ni tampoco oficialmente reconocido y está compuesto por “egresados” de la carrera de Derecho y registran estudios en las Universidades Señor de Sipán, César Vallejo y Pedro Ruiz Gallo, que residen en la misma localidad de Motupe.
- d)** Los magistrados no forman parte de la realidad de Motupe, son personas que domicilian en Chiclayo (preferentemente).

Igualmente se detalla que no son de Lambayeque y esto porque en el Consejo Nacional de la Magistratura no se detalla un nivel de “vinculación con la residencia habitual” y los postulantes a un cargo puede ejecutar una movilidad laboral a otros distritos judiciales.

La acreditación de que los jueces no domicilian en Motupe “permite” detallar el hecho de que los magistrados no conocen la realidad de las partes en los procesos en curso.

Cuadro N° 03:

Estadística de carga judicial con “procesos” vinculados al ámbito jurisdiccional en evaluación.

Nº	Expedientes	Poder Judicial	Ministerio Público
01	Año 2015	120	87
02	Año 2016	117	63
03	Año 2017	128	75

Este estudio casuístico ha sido analizado sobre la base de la información contenida en la estadística de la página web del Poder Judicial²⁷ y de la propia consulta a los magistrados en Motupe.

De este estudio se detalla:

a) Los casos más referenciales son:

- i.** Procesos de determinación de la obligación de alimentos: 43% en el Poder Judicial.
- ii.** Procesos de violencia familiar, en todas sus instancias y niveles: 38% tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.
- iii.** Procesos de determinación de tenencia y régimen de visitas: 15% a nivel del Poder Judicial.

b) Las estadísticas nos permiten detallar que los “obligados” a prestar alimentos no suelen invocar su derecho a un régimen

²⁷ PODER JUDICIAL. Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Juzgados de Familia. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorLambayequePJ/s_csj_lambayeque_nuevo/as_inicio/as_sedes/as_juzgados_especializados_mixtos/as_familia/

de tenencia o un régimen de visitas y ello incide en el factor subjetivo que provoca el incumplimiento en la prestación.

Igualmente en el estudio de casos y consultas a las partes procesales, se ha llegado a observar:

- i. La mayoría de demandados, registran otros hijos en otras parejas.

Este factor se incrementa en la medida en la mayoría de edad o crecimiento de las partes en conflicto.

- ii. La mayoría de madres registran hijos con otra pareja.

- iii. Las madres adolescentes o jóvenes no conocen el trámite judicial para defender su derecho o el de su hijo.

- c) Las estadísticas además nos permiten detallar que ni los jueces ni fiscales de Motupe han observado que en un mismo distrito se ha observado que un mismo “problema” se desarrolla en dos procesos judiciales.

Esta situación se ha llegado a constatar sobre la base del siguiente cuadro:

Cuadro N° 04:

Registro del contexto problemático por parte del juez.

Nº	Pregunta	Poder Judicial	Ministerio Público
01	Conoce a las partes procesales	no	no
02	Sabe cual es la realidad económica de las partes en conflicto	no	no
03	Sabe si las partes tienen otros "hijos" o están en "una segunda familia"	no	no
04	Se ha ejecutado una evaluación del contexto socio económico de las partes en conflicto con alguna pericia	no	no

Estos datos estadísticos nos permiten detallar:

- a)** Los jueces y fiscales "no conocen" la realidad que involucra a las partes judiciales con lo cual no conocen el verdadero alcance del artículo 481 del Código Civil, que en la presente tesis está expuesta como el "Factor "C"".

En esencia, esta condición nos permite detallar:

- i.** Que los fiscales no saben si la "obligación alimentaria" que es incumplida se debe a una causa objetiva,

subjetiva, o maliciosa o de incumplimiento deficiente por parte del obligado a prestar alimentos.

- ii. Que los jueces, al no contar con un apoyo de un Equipo Multidisciplinario, no llegan a conocer la realidad económica y social de las partes en conflicto.
- iii. Que los jueces y fiscales en el trámite de sus expedientes no logran “consultar” sobre esta realidad a las partes procesales.

Cuadro N° 05.

Registro de las “condiciones personales” de las partes en conflicto.

N°	Ítem	Padre	Madre
01	Registra un matrimonio / convivencia o relación con el/la otra parte en la actualidad	No	No
02	Registra un matrimonio, convivencia o relación con otra persona	Si: 75%	Si: 82%
03	Sólo para madres que han respondido		La abuela materna

	la pregunta (02): ¿Quién cria a los hijos?		
04	Tiene hijos con otra persona	Si: 65%	Si: 82%
05	Cuantos hijos tiene	02	03
06	Tiene trabajo estable	No	No
09	Su ingreso económico de cuanto es	<p>Sobre la RMV: 15%</p> <p>Debajo de la RMV: 80%</p> <p>no registra ingreso: 5%</p>	<p>Sobre la RMV: 10%</p> <p>Debajo de la RMV: 90%</p> <p>No registra ingreso 0</p>
10	Conoce los métodos de planificación familiar	Si	Si
11	Utiliza algún método de planificación familiar	No	No
12	Si no usa ningún método de planificación familiar, sabe la consecuencia que se puede generar	No	no

	Su nivel de educación es	Secundaria completa 85% Universitaria: 5% Colegio sin finalizar: 10%	Secundaria completa 80% Universitaria: 10% Colegio sin finalizar: 10%
--	--------------------------	--	---

Estos datos estadísticos nos permiten detallar:

- a)** La mayoría de las partes procesales tienen o registran muchos hijos en varias parejas.

Esto incide en la parte negativa en el “cobro” y en la “determinación de la obligación” económica a ser evaluada.

- b)** En el caso de “varones”, estos suelen no trabajar si “no hay condiciones laborales”, mientras que las “madres”, detallan que “sí trabajan” porque de lo contrario no podrían sostener la manutención de sus hijos.

Un detalle sumamente importante a detallar porque los hijos al quedarse con la madre exigen una conducta que eventualmente no es “asimilada” por los obligados a prestar alimentos, quienes pueden asumir una posición más pasiva sobre su obligación.

- c)** La incidencia del contexto económico si bien es “conocido” por las partes y conocen el contexto de sus parejas, **no**

incide en su conducta sexual y eso se evidencia en el escaso uso de método de control de natalidad.

- d)** El acceso a la educación no es un valor referencial en el ámbito jurisdiccional, donde la tasa de “personas con estudios superiores es muy baja”.

Esto se relaciona con el contexto de la baja condición socio cultural de las personas en conflicto.

Cuadro N° 06

Registro de datos a los especialistas consultados.

N°	Pregunta	Sí	No
01	Ha ejecutado algún estudio de campo en cuanto a la evaluación de “procesos de alimentos	MPP si JFV; si EVR: si EBO:si	
02	Ha ejecutado algún estudio de campo en la cual se analicen los problemas del cobro de alimentos en la vía judicial civil/familia y en la vía penal		MPP no JFV; no EVR: no EBO: no
03	Considera que el Poder Judicial y el Ministerio Público son ineficientes ante los derechos de un menor que exige alimentos		MPP no JFV; no EVR: no EBO: no

04	Existe relación entre los derechos alimentarios y el "tiempo prudencial" en la ejecución y materialización de ese derecho		MPP no JFV; no EVR: no EBO: no
05	Si no existe relación entre el "tiempo" en que se tramita un proceso de alimentos y su derecho en el ámbito real y material, ¿El proceso judicial de alimentos es eficiente?	MPP si JFV; si EVR: si EBO: si	
06	Si considera que el proceso judicial de alimentos es eficiente porque existe un proceso penal de OAF en la cual en los cuales son se detalla un "dolo" no se puede "formalizar la denuncia". Es "eficaz" este delito	MPP si JFV; si EVR: si EBO: si	

Cuadro que nos permite detallar:

- a)** Los entrevistados no logran identificar un "contexto real" de análisis y se centran en sus estudios teóricos que difieren de la realidad de la casuística judicial.
- b)** Los entrevistados a pesar de que enfatizan sus "experiencias" en el ámbito de los temas en estudio, detallan

investigaciones que no logran vincular sus respuestas y por eso se puede apreciar una incongruencia en las preguntas (1) con las preguntas (5) y (6)

c) Igualmente se observa una incongruencia entre las preguntas (2) y (3) a pesar de que son complementarias.

d) Las “respuestas en bloque” de los especialistas, nos permiten detallar la poca evaluación de “casos particulares” o “casos específicos” y ello se deduce del escaso nivel de cuestionamiento por el bajo nivel de conocimiento de la realidad material en evaluación.

Este punto es significativo por cuanto los especialistas no han conocido las respuestas de los colegas encuestados o entrevistas.

Inclusive este “detalle” sólo fue analizado por nuestro asesor de tesis quien consideró que es uno de los elementos en los cuales se enfatiza la presente tesis respecto del proceso de despenalización parcial del delito de omisión de asistencia familiar, en casos específicos.

Con lo cual nos permite detallar que el contexto de la bibliografía referencial empleada también incide en estos errores materiales sobre las cuales se ha detallado que existe una “visión positiva” sobre el proceso judicial de “cobro de alimentos” pero no se guarda una relación con el contexto jurisdiccional penal en la cual se registra una “omisión de prestar alimentos” y ello es un error que se extiende en el ámbito de la realidad de Motupe.

El estudio casuístico del último cuadro nos permite detallar que resulta imposible de evaluar el contexto temático de la bibliografía si no se ejecuta un trabajo de campo, porque las “realidades” en evaluación son distintas entre sí, siendo inclusive contradictorias.

CAPÍTULO III.

EL PROCESO DE ALIMENTOS: EL PRIMER PROCESO (SOLICITUD, DETERMINACIÓN Y EXIGIBILIDAD)

Toda vez que hemos señalado que en el presente ámbito de estudio co-existen dos procesos judiciales, en el presente capítulo se estudiará el “primer proceso”, en el cual se determina el “derecho de recibir alimentos”, el cual está determinado bajo las siguientes características:

- a)** Está limitado sólo para casos de procesos judiciales en los cuales se plantea el derecho que tiene todo hijo, menor de edad, por parte de un progenitor que no le asigna alimentos.
- b)** Esta condicionado a un contexto en el cual, la madre actúa como “representante procesal” y esto nos permite detallar que en el caso de Motupe a pesar de que son las “abuelas” quienes crían a los hijos menores de edad, estas no intervienen en el proceso judicial en alguna instancia.
- c)** Está determinado en forma absoluta que en Motupe el “proceso de alimentos” lo inician “madres” en representación procesal de sus hijos.
- d)** Está acreditado que a mayor “cantidad de hijos”, las madres conocen “mejor” el procedimiento de petición de brindar alimentos al “padre”.

- e)** Está vinculado que los jueces y fiscales en el ámbito del derecho civil y de familia no conocen el contexto “social, cultural y familiar” de las partes en conflicto.

3.1. LA EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS EN LA EXIGENCIA DEL PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL HIJO.

Estos elementos materiales inciden en las características particulares del proceso judicial en alimentos en las siguientes etapas:

- a)** En cuanto a la “determinación” de la obligación.

Principalmente porque las partes procesales no logran conocer:

- i.** El contexto económico que fundamenta la “necesidad” económica y no se logra cuantificar algunos “bienes”, “servicios” o “prestaciones” específicas²⁸, como:
 - (a)** El cuidado personal al hijo dependiente.
 - (b)** La atención de “golosinas” y “alimentos fuera del desayuno/almuerzo/lonche.
 - (c)** Vestimenta “de diario”.

²⁸ ACTUALIDAD JURÍDICA. El nuevo plazo de prescripción para el cobro de pensiones alimenticias. P. 13-37. En: Actualidad Jurídica. Tomo 245. Abril. Lima-Perú. 2014.

- ii. El contexto de relación entre “los alimentos” y el derecho del “obligado a prestar alimentos” que se relaciona con las “visitas”²⁹.

Esto se desprende del hecho material de que los obligados a prestar alimentos que se resisten a cumplir dicha obligación no logran tener un vínculo específico o constante con sus hijos por propia acción o desinterés.

- iii. Las partes procesales no llegan a conocer el verdadero “contexto económico” que sustenta sus “ingresos” y “egresos” económicos en forma mensual.

Así tanto el “padre” como la “madre” no son conscientes de su verdadero contexto económico, principalmente porque se actúa en función de la “familia” que respalda a cada parte.

Esto se evidencia en la complementación de los siguientes aspectos:

- (a) Las partes domicilian en una “vivienda familiar”, con lo cual el gasto del “alquilar” o “el mantenimiento de la vivienda” no es considerado importante³⁰.

²⁹ ACTUALIDAD JURÍDICA. Medida Cautelar de oficio en los procesos de Alimentos. En: Actualidad Jurídica. Tomo 216. Lima-Perú. Noviembre 2011

³⁰ AGUILAR, Benjamín. Claves para ganar los procesos de alimentos: un enfoque aplicativo de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. Lima-Perú. Gaceta Jurídica

- (b)** Los gastos de “instalación” de la vivienda no son considerados importantes.

Esto se evidencia en el “uso” de las instalaciones de la casa que es de propiedad de los abuelos y que por tanto no “implica” la asunción del gasto de compra de “cocina”, “balón de gas”, etc.

- b)** En cuanto al inicio del proceso judicial en sí mismo³¹.

Las partes no son conscientes del “derecho en debate” y por lo general, suelen tener diferentes criterios para “iniciar” el nivel de exigencia en el pago de los alimentos.

Estos factores se grafican en los siguientes aspectos

- i.** Cuando la madre es adolescente o joven, la “demora” en plantear un proceso de alimentos es muy elevado, generalmente se relaciona con el inicio de la “etapa escolar” del hijo, no cobrándose alimentos durante la etapa previa.
- ii.** Cuando la madre ya tiene un “hijo con una pareja” anterior o posterior, el procedimiento de exigencia de alimentos es casi inmediata a la “separación con el padre”.
- iii.** Cuando la madre ya es “mayor” (sobre los treinta años) no ejecuta el pedido de alimentos sino hasta que se

³¹ CAJ (2009) Derecho de Familia. Comisión Andina de Juristas. Lima-Perú. Pp. 24

“necesita” por cuanto la madre asume en forma exclusiva el mantenimiento del hijo, hasta que surge “una situación especial”, generalmente vinculado al ámbito de la salud y ello le “motiva” a exigir dicha obligación.

Estos elementos resultan sumamente importantes a detallar y esto no logra ser comprendido por los jueces y fiscales en Motupe y probablemente en el resto del contexto nacional.

- c)** En cuanto a la negociación para la determinación de los alimentos.

Lamentablemente en Motupe no existen “Centros de Conciliación” que tengan una estadística formal sobre “casos en los cuales se haya evaluado el pedido de alimentos” y de los centros de conciliación existentes, no se ha logrado obtener ninguna respuesta sobre este punto³².

En este contexto, sobre la base del estudio de campo y antes las consultas directas a las “partes procesales” se ha observado que pocas personas conocen el verdadero contexto de la “negociación y conciliación” de los asuntos que involucran la prestación de alimentos.

³² CASTILLO FREYRE, Mario. Nueva Ley de Arbitraje: ¿Cuáles son las materias admirables? P. 117. En: Actualidad Jurídica, tomo 177. Lima-Perú. Agosto 2008.

- d)** En cuanto al inicio y planteamiento de los casos de “abandono” y “allanamiento” como comportamiento de las partes procesales.

Se ha llegado a consultar con los jueces y fiscales de Motupe sobre estos aspectos y los resultados son concluyentes:

- i.** Se ha llegado a determinar que no existen casos de “allanamiento” ante casos de demandas de alimentos, porque los progenitores asumen una “exigencia” desproporcional a sus derechos, sin tomar en cuenta que quien lo requiere es el hijo, sin tomar en cuenta el contexto de aplicación del “interés superior del niño” ³³.
- ii.** Se ha llegado a comprobar que las madres que plantean alimentos, sobre la base de una consulta legal hecha en algún consultorio jurídico y que formulan sus demandas sin “firma de abogado”, suelen “abandonar” el proceso judicial, porque no conocen el trámite formal del seguimiento de un expediente judicial.
- iii.** Se ha llegado a determinar que cuando las partes son “más jóvenes” es mucho más viable “negociar” un acta de conciliación en el desarrollo del proceso, esto porque las “partes procesales” asumen una condición de inferioridad frente a los magistrados.
- iv.** Lo expuesto es contrapuesto a los casos en los cuales las partes procesales son “mucho más mayores”, y este

³³ AGUILAR LLANOS, Benjamin. Derecho de familia. Ediciones Legales. Lima-Perú. 2013. Pp. 21

factor hace incidir en su comportamiento procesal, por medio de la cual se resisten a cumplir las disposiciones de los jueces en el trámite del proceso judicial.

- e)** En cuanto a la determinación de la “suma económica” a ser regulada en la sentencia.

Se ha observado que la falta de elementos probatorios³⁴ y de registro de elementos de pericia, inciden materialmente en la “mala determinación” de la suma económica de los alimentos porque estos no representan la realidad material de las partes procesales.

Este punto incide negativamente en la determinación objetiva del artículo 481º del Código Civil, en particular porque:

- i.** No se hace un verdadero estudio de las “necesidades” del alimentista y con ello no se logra cuantificar su verdadero contexto de “petición” de la suma alimentaria.
- ii.** No se logra “identificar” la “capacidad económica” de la representante procesal y ello nos permite detallar que la “madre” no suele presentar el contexto económico que vive.
- iii.** No se logra identificar el nivel de “ingresos económicos” de la parte obligada a prestar alimentos y esto se

³⁴ BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal -Parte General. 2ª edición, Buenos Aires-Argentina. Hammurabi. 1999.

asume como un punto medular en la evaluación del proceso judicial.

Bajo estas condiciones, el proceso judicial de alimentos en una primera instancia resulta “disfuncional” y es ineficaz porque estas sentencias una vez emitidas, no son cumplidas.

f) Respecto del seguimiento en el cobro de alimentos.

Una vez impuesta una sentencia judicial en un “primer proceso”, las partes judiciales no logran “informar” sobre el contexto de exigencia y cumplimiento de esta sentencia judicial.

g) Demora en la denuncia por la “omisión de alimentos”³⁵.

Este factor está vinculado principalmente al contexto económico de las madres, quienes sólo plantean la exigencia de esta obligación cuando ya les resulta sumamente complicado cubrir las necesidades de los hijos.

Este factor socio cultural nos permite detallar que la “participación” económica de la familia de la madre es un factor sumamente importante en nuestro campo de análisis y debate.

Este punto nos permite detallar que tanto el legislador como el juez o fiscal no logran interiorizar el verdadero contexto en

³⁵ SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Editorial Iustitia. Quinta Edición. Lima-Perú. 2013.

el cual se planteó los “derechos del niño” según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en las Naciones Unidas en 1989, conforme se puede detallar en la opinión de Miguel Ángel Verdugo:

“Los ponentes de esta sesión plenaria recogen en sus intervenciones cómo se lleva a cabo la aplicación del principio del interés superior del niño en diferentes países,... planteando el desarrollo de una mayor sensibilidad cultural para poner en práctica los derechos del niño”³⁶.

h) En la etapa de formulación de la “omisión en la prestación de alimentos”.

En este punto en particular, las partes que denuncian la omisión en la prestación de alimentos no son conscientes de la “realidad económica” de la contraparte porque los niveles de relación son prácticamente nulos o muy escasos, principalmente porque “cada parte procesal” ya cuenta con otra “pareja”.

Esto se logra evidenciar en los cuadros del Segundo Capítulo y que han sido producto de la interacción con las partes procesales en Motupe y que nos ha permitido “conocer” una realidad que los “especialistas” consultados no conocían.

En este punto en particular podemos detallar otro aspecto importante en análisis: la mayoría de la doctrina señala que la

³⁶ VERDUGO, Miguel Ángel. La convención de los derechos del niño hacia el siglo XXI. Salamanca-España. Universidad de Salamanca, 1996. Pp. 25

legislación sobre este tema en particular, es correcta y no la cuestionamos por cuanto los contenidos temáticos de toda la legislación aplicable es la correcta, aún inclusive las últimas modificaciones.

Así podemos detallar el análisis de la Ley Nº 28457 que ha sido modificada por la Ley Nº 30628, formulada por Emilio Balarezo:

“Analizando detenidamente los cambios secuenciales que se han venido presentado podemos advertir que los mismos giran respecto de determinados aspectos relevantes pero netamente procesales. Entre ellos podemos citar, por ejemplo, la vía procesal correspondiente, así como la demanda, la oposición, la competencia, etc.”³⁷.

Detalle que nos permite plantear nuestra crítica al “procedimiento” en el cual se desarrolla el proceso judicial de determinación de la obligación de alimentos y en particular en la “evaluación de la capacidad” económica del obligado a prestar dicha obligación.

3.2. EL PROCESO PRINCIPAL, LOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS Y LOS RECURSOS PARALELOS.

En este punto, sobre la evaluación estadística en estudio, podemos detallar:

³⁷ BALAREZO, Emilio. En búsqueda de la efectividad de la justicia. En Gaceta Civil. Tomo 56. Lima-Perú. Febrero 2018. Pp. 216.

- a)** La mayoría de “procesos de pago de alimentos” se plantea como un “recurso o procedimiento cautelar”, y no se sigue el proceso “principal”³⁸.

Esta deficiencia del “sistema” jurisdiccional en realidad no “constituye un problema material”, por cuanto el “derecho” en debate es atendido, pero nos permite evaluar que la “legislación” es amplia y difusa sobre un “único punto”.

- b)** En esencia el punto precedente nos permite detallar que existen los siguientes procesos:

- i.** Proceso de alimentos, propiamente dicho.
- ii.** Petición de determinación anticipada de alimentos, planteado como “medida cautelar” fuera de proceso.

Esta es la referencia más común en el ámbito de Motupe.

- iii.** Petición económica cuantificada en la demanda de divorcio, que genera una relación muy especial con el “tiempo” en el cual se plantea el monto económico a ser proveído por el obligado (el padre)³⁹.

La amplitud de situaciones que generan un “proceso judicial” con un “expediente judicial” resulta sumamente negativo en el ámbito

³⁸ REGGIARDO SAAVEDRA, Mario. Aproximaciones a la litigiosidad en el Perú. P. 223. En: Themis, Época 2, N° 62. Lima-Perú. 2012

³⁹ TORRES CARRASCO, Alberto. Patria Potestad, tenencia y alimentos. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2014. Pp. 221

de la determinación de un derecho fundamental como lo son los alimentos y nos permite plantear que el “propio sistema legislativo” está incurriendo en un error que en la presente tesis no está identificada como “objetivo” de la investigación⁴⁰.

Igualmente se debe señalar que existe una referencia directa y proporcional con los casos de “violencia familiar” que se evidencian en Motupe y que en este contexto se desata un “proceso judicial en forma paralela” al ámbito y ejecución de la obligación de brindar alimentos.

La elevada incidencia de “contextos familiares” complicados, que se evidencian en “múltiples parejas” y en contextos de “deficiencia económica”, porque no se acredita un ingreso de remuneraciones en forma estable, obliga a que las partes “exijan” o “debatan” el contexto de la determinación de los alimentos en forma sumamente violenta y esto se refleja en el resultado del último cuadro en evaluación:

Cuadro N° 07

Relación entre casos de violencia familiar con procesos de alimentos.

N°	Pregunta	Padre	madre
01	Sigue un proceso de	Si	si

⁴⁰ PODER JUDICIAL (2017) Estadísticas. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_estadistica/

	violencia familiar		
02	Quien fue la parte demandante	La madre	El padre
03	Cual es el principal factor de la denuncia por violencia familiar	No me deja tener contacto con el hijo o hijos	El padre omite prestar alimentos y reacciona en forma violenta
04	El contexto de violencia se ha mantenido en el tiempo	En casos de adolescentes: si En casos de jóvenes: si En caso de adultos: no	En casos de adolescentes: si En casos de jóvenes: si En caso de adultos: si

Como se podrá detallar en el presente cuadro:

a) Las partes por lo general no vinculan el “tiempo” en el cual plantean los procesos judiciales seguidos porque atienden otros “elementos importantes”⁴¹, como la búsqueda de un sustento económico en forma directa.

b) Las partes no consideran los derechos de la contraparte⁴².

⁴¹ MONTOYA CASTILLO, Carlos. Problemas más frecuentes en la calificación de las demandas judiciales. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2013. Pp221.

⁴² PASTOR, Santos. El Análisis Económico del Acceso a la Justicia. Madrid: Ministerio de Comercio. 1990. Pp. 247

- c) Las partes no toman en cuenta que el “tiempo” es un factor importante en el ámbito de la vigencia de sus derechos y obligaciones.
- d) Las partes procesales asumen que “la contraparte” es un rival en forma absoluta⁴³, y no coinciden en “puntos en común”⁴⁴, a pesar de las circunstancias y ello eleva la calidad del conflicto.

3.3. LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA MADRE.

Un factor sumamente importante en el análisis y que se vincula con la “etapa” en la cual se ejecuta el proceso judicial, principalmente porque se relaciona con la capacidad de evaluar el “problema en sí mismo”.

En esencia las “tres edades” en las cuales se identifican a las “madres” durante el proceso de alimentos nos permiten detallar que existe una referencia muy directa y específica.

- a) Cuando la madre es adolescente, el proceso de alimentos no se plantea en forma directa e inmediata a la “necesidad”.

⁴³ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “El Proceso de Determinación e Individualización de la Pena en el Sistema de los Tercios”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Editora Gaceta Jurídica Tomo 69. Lima-Perú. Marzo 2015.

⁴⁴ COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA PARA EL DESARROLLO (2014) Informe al Ministerio de Justicia sobre el impacto del Nuevo Código Procesal Penal. Documento de trabajo. MINJUS. Lima-Perú.

Esto se vincula principalmente con el contexto de que la “familia de la madre” apoya económica el mantenimiento del hijo de la adolescente.

Adicional a esta condición, la falta de un conocimiento pleno de sus derechos limita la ejecución de cualquier acción legal que se complementa con la ausencia de recursos económicos para formular “consultas” o “movilidades para ejecutar las consultas legales”, que usualmente se hacen ante el Centro de Emergencia Mujer que se ubica en la ciudad de Chiclayo.

b) En cuanto a las madres jóvenes.

La incidencia en el “inicio” del proceso judicial de alimentos está vinculado a la “etapa del incumplimiento” de la prestación de alimentos, principalmente porque la madre exige el cumplimiento del mismo porque la manutención del hijo no lo puede asumir en forma excluyente.

Otro factor de importancia en este ámbito está vinculado con el contexto de la “presencia” de una nueva pareja quien no asume los gastos económicos del “hijo” que ha tenido la pareja con otro hombre.

El factor “machismo” es un elemento socio cultural muy importante en este ámbito.

c) En cuanto a las madres “adultas”.

En estos casos se evidencian dos elementos autónomos.

- i. En caso la madre tenga un “trabajo estable”, se observa que no se exige la prestación de alimentos al padre, principalmente para no tener ninguna relación personal con el padre de los hijos.

En este punto, la mayoría de las “madres adultas” señalan este factor para evitar nuevas situaciones de violencia familiar.

- ii. En caso la madre “no cuente con un trabajo estable”, el inicio de los procesos de cobro de alimentos suelen provocar las denuncias ante el Ministerio Público por la omisión de alimentos y esto es porque las condiciones económicas inciden en la “pretensión” que justifica el proceso judicial.

3.4. LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL OBLIGADO A PRESTAR ALIMENTOS.

Como característica general de las “partes demandantes” en la fundamentación de sus pretensiones se puede detallar que las “madres” no conocen el verdadero contexto económico de los “padres”, y esto es porque:

- a) Los padres no informan en qué trabajo o actividad económica se desarrollan.
- b) Las madres no logran conocer con exactitud el ámbito laboral y económico de los padres y por ello suelen vincular el pedido de un cobro “por porcentaje” al ingreso económico que “asumen” pueda tener el obligado a prestar alimentos.

- c)** Las madres no cuantifican las necesidades económicas de los hijos en base a la capacidad de gasto del padre.

En esencia este factor nos permite validar nuestro trabajo de investigación por cuanto los ***obligados a prestar alimentos no siempre llegan a tener capacidad de pago*** y por ello omiten prestar alimentos.

En este sentido, sobre la base de la pregunta N° 09 del Cuadro N° 05, se puede detallar:

(Se reproduce la pregunta de la encuesta y los resultados)

		Padre	madre
09	Su ingreso económico de cuanto es	<p>Sobre la RMV: 15%</p> <p>Debajo de la RMV: 80%</p> <p>no registra ingreso: 5%</p>	<p>Sobre la RMV: 10%</p> <p>Debajo de la RMV: 90%</p> <p>No registra ingreso 0</p>

Que los padres, registran estos “trabajos”:

- a)** Empleado obrero en el sector construcción: 60%

b) Empleado obrero en el sector agrícola: 25%

c) Empleado vinculado al ámbito de los transportes: conductor de mototaxi, cobrador, “datero”: 15%

Un aspecto sumamente importante porque materialmente se puede relacionar el hecho de que los “obligados” a prestar alimentos no cuentan con una garantía objetiva ni para mantener su propia subsistencia.

Esto es, los ingresos acreditados en caso sean demandados estos señores evidencian que viven en un contexto de “pobreza extrema” y no incide en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, porque lamentablemente asumen que si “lo hacen”, se verán condicionado a “pagar más alimentos”.

El comportamiento doloso⁴⁵ y negligente en este ámbito incide materialmente en la “determinación de la obligación de pago de alimentos” y es un problema que el “primer proceso de cobro de alimentos” no logra solucionar.

3.5. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO DETERMINADO EN EL ÁMBITO JUDICIAL.

Lamentablemente en el contexto jurisdiccional en la cual se complementan los factores de “pobreza”, “ignorancia en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes procesales” y “lentitud en

⁴⁵ ATIENZA, Manuel. Ilícitos atípicos: sobre el abuso del derecho, el fraude de la ley y la desviación del poder. Madrid-España. 2000. Pp. 33.

el trámite de un proceso judicial”, el “interés superior del niño” llega a ser un principio no exigible al trámite judicial.

De este modo se plantea que el desarrollo del proceso judicial llega a ser disfuncional y en esencia “perjudica” al verdadero interesado en que se determine y se determine una pensión de alimentos, porque el niño en forma autónoma no puede subsistir ni mucho menos puede vincularse a un contexto laboral.

De este modo, como señala Raquel Castillejo ⁴⁶, las partes procesales inciden negativamente en la materialización de este principio en el ámbito del seguimiento del proceso de pago de alimentos o “primer proceso” ⁴⁷, conforme la presente estructura del Tercer Capítulo

Esto finalmente se complementa con los casos de “omisión de la demanda o denuncia respectiva” en el tiempo y que ha provocado un error en el trámite de los devengados en forma constante en el Poder Judicial⁴⁸ y que nos permite detallar que su regulación es de reciente data, en particular para estipular que los devengados se pueden cobrar aún hasta un plazo de quince años al surgimiento de esta “obligación” ⁴⁹.

⁴⁶ CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. Violencia de género, justicia restaurativa y mediación. Madrid-España. La Ley. 2011. Pp. 245

⁴⁷ RENTERÍA DURAND, María Margarita. Las medidas cautelares: en el derecho de familia. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2012. Pp. 73

⁴⁸ AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Gaceta Civil & Procesal Civil N° 05. Alimentos: principales controversias a nivel judicial. Lima-Perú. Noviembre, 2013. Pp. 13-27.

⁴⁹ ACTUALIDAD JURÍDICA. El nuevo plazo de prescripción para el cobro de pensiones alimenticias. Tomo 245. Pp. 13-37. Abril, 2014.

Igualmente se observa que las partes procesales no guardan conocimiento del verdadero contexto problemático en el cual se vinculan porque “diferencian”, los contextos judiciales en los cuales están involucrados, sin tomar en cuenta la directa relación de “estos casos” en el ámbito judicial⁵⁰.

Como tampoco logran relacionar estos “contextos” con el seguimiento de otros procesos complementarios, como el régimen de visitas o tenencia⁵¹.

Por ello, muchos padres no suelen vincular su “derecho a tener contacto con sus hijos”, porque desconocen esta situación⁵².

En función a estos elementos, la propia doctrina no suele vincular estos casos referenciales en un contexto mucho más amplio y complejo y ello se acredita en las entrevistas a los “especialistas” consultados y que amplían la doctrina aplicable sobre este punto⁵³.

Un detalle que ha sido estudiado por “Actualidad Jurídica” de la Institución Gaceta Jurídica, donde se detalla que: el “proceso de alimentos” no especifica ninguna referencia práctica por parte del juez al contexto del obligado a prestar alimentos y sólo se focaliza la atención en el derecho del alimentista, sin tomar en cuenta que

⁵⁰ Ver: LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Compendio de derecho de familia. Madrid-España. Dykinson. 2013. Pp. 13

⁵¹ TORRES CARRASCO, Alberto. Patria Potestad, tenencia y alimentos. Lima-Perú. Gaceta Jurídica. 2014. Pp. 221

⁵² GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. Pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal. Jurista Editores. Lima-Perú. 2013. Pp. 275.

⁵³ AGUILAR, Benjamín. Claves para ganar los procesos de alimentos: un enfoque aplicativo de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. Lima-Perú. Gaceta Jurídica. Pp. 366

existen dos personas involucradas en la atención de las necesidades el alimentista (el padre y la madre)⁵⁴.

Un error material que finalmente es expuesto por Alex Plácido que tampoco hace mención a este detalle en particular. Así Alex Plácido en su texto "Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes", al detallar el derecho de alimentos de estos no detalla en ningún momento la "obligación o condición del prestador de alimentos", con lo cual sólo se ha evaluado "una parte" del conflicto material que deviene en un proceso judicial⁵⁵.

Misma situación que evidencia Carmen Julia Cabello quien actualmente es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República y en la cual detalla en su libro sobre "derecho alimentario entre cónyuges", que la "madre" prácticamente no es "evaluada" y sólo se consigna al "padre" como el único obligado a prestar tal "exigencia" ⁵⁶.

Factor que también es "evidenciado" en el caso del entrevistado Enrique Varsi Rospigliosi, quien en su texto sobre "jurisprudencia sobre derecho de familia"⁵⁷, tampoco ubica alguna referencia sobre la "capacidad económica" del obligado a prestar alimentos.

⁵⁴ ACTUALIDAD JURÍDICA. Medida Cautelar de oficio en los procesos de Alimentos. Tomo 216, Noviembre 2011. p. 13-44.

⁵⁵ PLACIDO, ALEX. Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Instituto Pacífico, Lima-Perú. Pp. 434

⁵⁶ CABELLO MATAMALA, Carmen Julia. Derecho alimentario entre cónyuges. En: Derecho PUCP. Vol. 50. Lima-Perú. Pp. 417-431

⁵⁷ VARSI, Enrique. Jurisprudencia sobre derecho de familia. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. Pp. 438

CAPÍTULO IV.

EL DELITO DE OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS: EL SEGUNDO PROCESO

En el desarrollo del presente capítulo analizaremos los aspectos “penales” del objeto de nuestro ámbito de estudio, por cuanto es el elemento que nos permite fundamentar el último capítulo de la presente tesis, en particular para articular la fundamentación de la “despenalización parcial” del delito contenido en el artículo 149º del Código Penal.

Para el desarrollo de este punto, inicialmente analizaremos un contexto proveniente del Derecho Comparado.

4.1. LA OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR COMO “DELITO” EN EL ÁMBITO DEL DERECHO COMPARADO.

A efectos de demostrar la importancia del “trabajo de campo”, debemos detallar que este punto nos permitirá identificar algunos “contextos semejantes” y otros elementos “de diferenciación” con el contexto comparado, en particular sobre la base de los siguientes elementos:

a) En Argentina.

En agosto del año 2015 se promulgó un nuevo Código Civil en Argentina el cual reemplazó un Código Civil histórico: el de Velez Sarsfield y en la misma no existe una determinación

específica sobre “los alimentos” que no hayan sido cumplido o prestados.

Sin embargo, en el ámbito de la legislación Penal ubicamos la Ley Nº 13944, que detalla el “delito de omisión de asistencia familiar”, el cual está registrado en el buscador de normas de la Cámara de Senadores de la República de Argentina.

b) En Brasil.

No se ha ubicado una información específica y se ha buscado en el buscador de normas del Congreso Federal del Brasil, con lo cual no se puede ejecutar un análisis comparado.

c) En Bolivia.

Desde 1988 el delito de omisión a la asistencia familiar está regulado en el ámbito penal en Colombia con la Ley Nº 996, el cual sin embargo sólo hace referencia al derecho afectado y no detalla mayores referencias sobre la evaluación del delito.

d) En Colombia.

Se ubica la Ley Nº 1542 de 2012, en la cual se regula el “delito de inasistencia alimentaria”, el cual cuando se registra debe cumplir con los alcances del artículo 42º del Código Penal para la determinación del delito, esto es vinculado al cumplimiento del “dolo” en el agente activo.

Un elemento importante para el análisis de nuestro tema de investigación de tesis, por cuanto el delito en el Perú es “evaluado” recién en la sede del Ministerio Público y ahí es donde se determina la “capacidad económica del agente denunciado” quien al no tener recursos no puede “cumplir con su obligación” y por lo tanto no configura el dolo”.

e) En Ecuador.

En Ecuador no está regulado el “delito” de omitir alimentos a los dependientes familiares, principalmente porque en el ámbito jurisdiccional de familia o civil en Ecuador se especifica la condición “legal” de este acto como propio de dicha jurisdicción, no evaluándose el contexto penal.

f) En México

En el artículo 335 y siguientes del Código Penal se detallan los “delitos vinculados al abandono de personas” en la cual se detalla la “posibilidad” que la omisión de alimentos sea considerado un delito, pero en función a su evaluación si es que el alimentista se ve perjudicado en su integridad física por tal acción.

La norma porte tanto resulta poco clara en su regulación y por ello merece ser especificado en una norma autónoma pero esta no ha sido posible ubicar en el ámbito de la búsqueda de normas específicas al respecto.

4.2. RESPECTO DEL TIPO PENAL DE OMISIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.

En forma detallada y puntual se especifica que el estudio del presente sub punto nos permitirá identificar algunos elementos “importantes” en nuestro análisis y ello es importante a destacar porque no se hará un “resumen” de lo que detalla la doctrina, por cuanto toda la doctrina señala los mismos elementos referenciales.

En tal sentido, el sentido de este detalle es la ejecución de un “resumen ejecutivo” que nos permita detallar el “delito” en su propia y real dimensión.

a) Sujeto pasivo:

Es el hijo menor de edad a quien se le identifica como “el sujeto alimentista”.

En este sentido, su “género” resulta indiferente frente al contexto del derecho a ser planteado⁵⁸.

Se enfatiza que para la presente tesis sólo se ha identificado como “sujeto titular del derecho” a la persona menor de edad en situación de dependencia de parte de sus progenitores.

b) Sujeto activo del delito.

⁵⁸ PLACIDO, ALEX. Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Instituto Pacífico. Lima-Perú. Pp. 25

Es el “que incumple con el abono de la obligación alimentaria” en forma general.

Dicha obligación está especificada en tres ámbitos⁵⁹, según la doctrina mayoritaria.

- i. Alimentos en cuanto una prestación económica.
- ii. Alimentos en cuanto a una prestación “personal” representado en la ejecución de acciones a favor del cuidado del hijo por parte del progenitor (padre/madre)
- iii. Alimentos no prestados, que son denominados como “devengados”.

c) El acto o verbo rector.

Vinculado con el hecho material en evaluación que es identificado como el “hecho típico y antijurídico”⁶⁰, por cuanto se requiere:

- i. Una capacidad de “omisión” en la prestación de forma dolosa.

Esto es un comportamiento que sea consciente que se está incumpliendo una obligación.

⁵⁹ ORTELLS RAMOS, Manuel. Profesiones jurídicas, formación jurídica y litigiosidad de una sociedad en evolución: el caso de España. En: Derecho PUCP, N° 52, 1999.

⁶⁰ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “El Proceso de Determinación e Individualización de la Pena en el Sistema de los Tercios”. Gaceta Penal & Procesal Penal, Editora Gaceta Jurídica Tomo 69. Lima-Perú. Marzo 2015.

- ii. Una condición regulada normativamente⁶¹, la cual está expresamente tipificada en el Código Penal, según el artículo 149º.
- iii. Una consecuencia objetiva en cuanto al “daño” ejecutado por el incumplimiento en el pago en forma dolosa⁶².

d) Determinación de condiciones agravantes y atenuantes en la omisión de alimentos.

Vinculado sobre todo a la determinación de nuestro ámbito de estudio, sobre la cual se detalla la viabilidad de despenalizar (parcialmente) el delito, cuando se registre un comportamiento que no sea doloso por parte del obligado a prestar alimentos.

Estos actos de exclusión del comportamiento doloso pueden ser identificados como la ejecución de:

i. Pagos parciales.

Tanto en forma económica como a nivel referencial en el ámbito de los cuidados y atenciones personales⁶³.

⁶¹ PASTOR, Santos. El análisis económico del Acceso a la Justicia. Madrid: ministerio de Comercio. Madrid-España. 1990. Pp. 247

⁶² PEÑA CABRERA, Alonso Freyre. Derecho Penal Parte Especial- Tomo I, Editorial Idemsa – Perú. 2008.

⁶³ MONTOYA CASTILLO, Carlos. Problemas más frecuentes en la calificación de las demandas judiciales. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2013. Pp. 221.

ii. Incumplimientos de pagos periódicos.

Motivados por una incapacidad de cumplimiento acreditado objetivamente⁶⁴.

iii. Pagos no “acreditado” pero detallados por las partes en conflicto⁶⁵.

Pagos que suelen ejecutar los “familiares” del obligado a prestar alimentos que se traducen generalmente en los actos ejecutados por los “abuelos”⁶⁶ y “tíos” (hermanos) que asumen una prestación económica a favor del “hijo alimentista” que no se puede apreciar en forma económica y que en Motupe se puede apreciar con notoriedad.

Este punto en particular es el que nos permite plantear nuestra posición en la presente tesis, por cuanto nos detalla una “realidad”⁶⁷ que es usual en el ámbito de las relaciones familiares en todo el país y se puede observar sobre la base de la práctica legal en la propia Región de Lambayeque y que es constatada en ambientes diferentes a los de Motupe.

⁶⁴ CASTELLANOS T., G., “Derecho Familia”, Sucre, Bolivia: Gaviota del Sur, 2011.

⁶⁵ CHÁVEZ ASECIO, Manuel. Conflictos familiares, su prevención y tratamiento. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002.

⁶⁶ BOUZA, JOSÉ MARÍA. “los abuelos y la obstrucción del vínculo con sus nietos” En: http://www.apadeshi.org.ar/los_abuelos_y_la_obstruccion.htm

⁶⁷ BIRGIN, Haydée y KOHEN, Beatriz. El acceso a la justicia como derecho. P. 15. En: BIRGIN, Haydée y KOHEN, Beatriz (compiladoras). Acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: Biblos, 2006.

La viabilidad de esta opción legislativa es la que finalmente se relaciona con nuestra investigación por cuanto el Poder Judicial y el Ministerio Público no puede evaluar este contexto, al estar ajeno al ámbito de sus funciones y que finalmente incide en el pésimo servicio de justicia que se brinda en los procesos de alimentos.

4.3. EL DERIVO E INICIO DE UNA INSTANCIA JUDICIAL PENAL A PETICIÓN DE UN PRIMER PROCESO YA FINALIZADO.

A la acreditación del “incumplimiento” en la prestación del pago de alimentos por parte del obligado a prestar dicha condición, el juez civil o de familia, que en el caso de Motupe es “juez mixto” debe plantear la denuncia penal⁶⁸ ante el Fiscal del Ministerio Público ubicado en Motupe, quien finalmente si encuentra “responsabilidad penal” ejecuta la denuncia penal ante el Juez de Investigación Preparatoria de Motupe.

Este punto nos permite demostrar la existencia de dos procesos judiciales complementarios y derivados entre sí.

De este modo es viable deducir:

- a)** Un proceso de alimentos que ha sido detallado en el capítulo precedente.

⁶⁸ BRONFENBRENNER, Urie. La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos naturales y diseñados. Barcelona: Paidós, 2002.

- b)** Un proceso penal seguido a petición del juez de paz de Motupe o del juez mixto de Motupe.

Esto nos permite detallar:

- a)** La ineficiencia del “primer proceso” en cuanto a la exigibilidad del derecho a brindar alimentos a favor de un “menor de edad” en condición de dependencia⁶⁹.
- b)** La ineficiencia del “procedimiento” regulado en el primer proceso en cuanto a la determinación de la “verdadera capacidad de pago” de parte del obligado a prestar alimentos.
- c)** La ineficiencia del sistema jurisdiccional en su conjunto para evaluar el contexto material en el cual se desarrollan las partes en conflicto y que se extiende en la agudización de los derechos afectados en los hijos involucrados en el problema de los padres⁷⁰.
- d)** La ineficiencia del sistema legal de “provocar” dos procesos judiciales para atender un “único” derecho en debate⁷¹.

⁶⁹ BOUCHÉ PERIS, Henri y otros. Mediación y orientación familiar. Consideraciones generales necesarias para el abordaje de la atención familiar. Madrid-España. Dykinson, 2006.

⁷⁰ BURRILL-O'DONNELL, Janelle. Parental alienation syndrome in court referre custody cases. Washington: Dissertation.com, 2002.

⁷¹ BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. Lima-Perú. ARA, 2001.

- e)** La ceguera de la doctrina tanto de derecho de familia como la de la doctrina penal en evaluar los puntos descritos anteriormente (del (a) al punto (d))

Bajo estas condiciones, se puede observar que tanto fiscales como jueces que evalúan este contexto jurisdiccional:

- a)** No evalúan las pericias técnicas que evalúan el contexto económico de las partes.

La referencia a las condiciones expuestas en los “fundamentos de hecho” son los elementos que inciden en el “error” del sistema jurisdiccional y que inciden negativamente en la ineficiencia del “segundo proceso judicial” por cuanto no se logra acreditar un comportamiento doloso en el obligado a prestar alimentos y que fundamenta nuestra posición en la presente tesis.

- b)** No existe un procedimiento coercitivo eficaz en el ámbito jurisdiccional civil o de familia y es un error del Sistema de Impartición de Justicia que no ha sido evaluado por el propio legislador.

- c)** No existe un mecanismo para evaluar el contexto económico de las partes en conflicto, en particular cuando se observan condiciones sociales, culturales, morales y económicas muy referenciales y que se reproducen en forma constante.

En este sentido, uno de los elementos que incide sobre manera en la generación de casos de violencia familiar, está vinculado a la negativa de los “padres” a prestar alimentos y

esto es porque estos ya cuentan con una “nueva familia” y sus condiciones económicas se han limitado en forma abrupta y estos han asumido una condición “pasiva” ante la necesidad del hijo, sobre quien se debate alimentos, porque el “trámite judicial” no se ejecutó cuando nació el hijo porque esta situación fue provocada por la propia madre.

Elementos muy específicos y particulares que inciden en el ámbito jurisdiccional y que no han sido detallados por la doctrina.

CAPÍTULO V.

LA DESPENALIZACIÓN DEL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR (HIPÓTESIS DE TESIS)

Consideramos que el desarrollo de la “hipótesis” como un *capítulo específico* forma parte de la “estructura” material de la presente investigación y esto es un “modelo” enfatizado en el seguimiento de los cursos de Metodología y de Tesis seguidos con el asesor de la presente Tesis, con lo cual podemos detallar en el presente capítulo:

a) Una *posición frente al tema en evaluación.*

Sobre esta base, planteamos una posición que es autónoma de la doctrina nacional, tanto en el ámbito familiar, civil e inclusive penal, por cuanto la doctrina no ha tomado en cuenta una “realidad en estudio”, la cual en la presente tesis sí se ha ejecutado y que nos ha permitido “conocer” de modo directo un contexto muy diferente al expuesto en la “legislación” y en la propia “doctrina”.

Consideramos que esta situación nos permitirá materializar nuestra posición en forma objetiva.

b) Un *aporte al ámbito del estudio de temas vinculantes a la realidad de Lambayeque.*

Sobre esta base, es que planteamos un tema especial y específico que ha sido evaluado en un ámbito específico: la realidad jurisdiccional que se evidencia en Motupe y que nos

permite proponer un sistema de propuestas que enfatiza la deficiencia en el sistema de prestación del servicio de justicia.

Por tanto, en la exposición del presente capítulo, proponemos en forma objetiva ***la despenalización del delito de omisión a la asistencia familiar, contenida en el artículo 149º del Código Penal***, sobre la cual planteamos una reformulación de la misma para así hacerla viable y práctica.

El detalle de nuestra propuesta es la siguiente:

Artículo 149.- Omisión de prestación de alimentos

*El que omita **dolosamente** cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.*

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.

El resultado de esta propuesta proviene de:

- a) El análisis casuístico de la jurisprudencia referencial ubicada en el distrito de Motupe en la Provincia y Región de Lambayeque.
- b) El estudio de la teoría aplicable al contexto temático en base a las especialidades de derecho de familia, derecho civil y derecho penal.
- c) El análisis de la “política criminal” peruana, la cual es inexistente y en base a esta condición se puede detallar que el contenido material del artículo 149º del Código Penal no tiene un “fundamento” expuesto en un elemento criminológico o de práctica jurisdiccional penal.

La evidencia de este punto se puede acreditar con la existencia de ***dos procesos judiciales vinculados ante el mismo problema material: la prestación de alimentos.***

- d) El análisis específico de las “partes que participan en el conflicto material”, sobre la cual se han ejecutado encuestas y entrevistas que nos han permitido detallar una “realidad” muy referencial que presumimos se expone en el ámbito nacional, porque estos factores son incidentes.

Validamos nuestra posición sobre la base de estos aspectos:

- i. El registro de la “edad” en las partes involucradas en procesos de alimentos.

La “juventud” de las partes incide materialmente en el “retraso” en la petición de la prestación y en casos de

“madurez” y vinculación “económica a un trabajo estable”, se observa que las “madres” no suelen plantear “demandas de alimentos”, porque hay una referencia muy importante: hay casos de violencia familiar que prefieren evitar las madres.

- ii. El registro de las condiciones económicas, que no es materialmente seguido por los magistrados esto porque no es una condición “detallada” en la legislación y que al ser “amplia y ambigua” no logra ser precisada en el “proceso judicial en curso”.

Sobre esta base, consideramos que los ***casos específicos en los cuales el obligado a prestar alimentos no tenga capacidad de pago, se determine la despenalización del tipo penal que condiciona el inicio de un proceso penal sobre este hecho típico y antijurídico.***

Se detalla en forma enfática que esta propuesta se debe en particular a los siguientes elementos:

- a) En vía penal no se logra “ejecutar” una obligación alimentaria.

Esto corresponde a la vía jurisdiccional civil o de familia y su traslado al ámbito penal es un error del sistema legislativo conforme el detalle del Código Penal.

- b) En vía penal no se logra “identificar” las condiciones personales de las partes en conflicto pero que sin embargo

inciden materialmente en la determinación del “comportamiento” a ser evaluado.

En estas circunstancias es que se evidencia que el obligado a prestar alimentos “no tiene la acción dolosa” de omitir alimentos porque su capacidad económica es limitada frente a la obligación ya detallada en una sentencia judicial expuesta por el juez mixto en Motupe.

c) Se logra acreditar que la “acción no es dolosa” por parte del obligado a prestar alimentos, cuando el fiscal ejecuta las siguientes indagaciones:

i. Se verifica el “número de dependientes económicos”.

La acreditación de una nueva pareja y de nuevos hijos, constituye un elemento que no es tomado en cuenta en los procesos civiles o de familia.

ii. Se evidencia que el “tiempo” transcurrido entre la demanda inicial y la sentencia inicialmente determinada con el “proceso penal” es un factor referencial en la cual se detalla la desvinculación entre estos factores.

De este modo es posible observar que en el “paso del tiempo”, las partes han desarrollado nuevas relaciones de pareja y tienen nuevos factores personales, sociales y familiares que no pueden ser desvinculados de las consecuencias materiales de la sentencia del primer proceso.

iii. Se evidencia que el comportamiento “no doloso” no excluye la obligación de prestar alimentos, pero que induce a su incumplimiento, por ello se evidencian casos de:

(a) Pagos parciales.

(b) Pagos asumidos en “prestaciones directas” o en asignaciones en “especie” por parte del obligado a prestar alimentos.

Con lo cual concluimos que en estos casos, se debe ***enfaticar y mejorar el proceso de alimentos, para que así se pueda ejecutar en la vía civil o de familia un verdadero cobro de alimentos***, porque esta condición no puede ser extendida en el tiempo en contra del “obligado a prestar alimentos” porque eventualmente la “condena penal” no constituye una garantía a favor del alimentista.

TERCERA PARTE

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Conforme a la ejecución de la investigación, se presentan los siguientes “resultados” de nuestra investigación, que finalmente incidirán en la redacción de las “conclusiones” y “recomendaciones” de la presente tesis, por cuanto se ha ejecutado:

- a)** Un análisis de la doctrina especializada en los temas abordados.
- b)** Un análisis de la legislación aplicable a la temática estudiada.
- c)** Un análisis de la “casuística” generada en base a la interpretación de datos estadísticos obtenidos en el estudio de campo de la presente tesis.

Sobre esta base, podemos señalar las principales condiciones que permiten exponer nuestros resultados como producto de la tesis:

- a)** El “proceso de alimentos” está mal estructurado, en función a que no existe un verdadero contexto de evaluación de las “condiciones personales” de las partes en conflicto y ello incide materialmente en el hecho de que no se logra mantener una “obligación alimentaria” que sea viable de sostener en el tiempo para las dos partes en conflicto procesal y para las tres partes en conflicto material, por

cuanto los hijos al crecer, demandan una mayor cantidad de recursos económicos para su subsistencia.

- b)** El factor “personal” de las partes en conflicto no se toma como un elemento vinculante en el “tiempo” (i) y en los procesos judiciales seguidos (ii).

Este factor incide sobre todo en los siguientes casos:

- i.** Casos en los cuales los “obligados a prestar alimentos” no han incrementado sus “ingresos económicos”, toda vez que en Motupe la gran cantidad de demandados por obligaciones alimentarias, no tienen un trabajo “formal” o “estable en el tiempo”.
- ii.** No se ha tomado en cuenta el contexto personal de las partes en conflicto.

Se debe señalar que en la realidad de Motupe se ha observado que los “procesos de alimentos” contienen a “partes procesales” que tienen procesos judiciales con terceras personas sobre el “mismo tipo de proceso”.

Esto es, tanto “demandante” como “demandado” tienen otros “hijos” con terceras personas y sobre ello se presentan otros procesos judiciales en los cuales las “obligaciones alimentarias” son también evaluadas y ello incide económicamente en el resultado de la “prestación de la obligación”.

Este factor se explica con el surgimiento de las “familias ensambladas” que constituyen la mayor característica de la zona de estudio.

- c)** El factor temporal en el seguimiento de los procesos judiciales no es muy tomado en cuenta por las partes procesales ni por el sistema jurisdiccional.

Se ha observado que los procesos judiciales en los juzgados de paz tienen un promedio de duración de diez meses y la “inejecución” de la sentencia que dispone una pensión de alimentos a un obligado (que no tiene trabajo predeterminado o estable o fijo) es denunciado a los tres años de haber sido determinado.

Al tercer año de haberse impuesto la sentencia que determina el pago de alimentos, las partes procesales ejecutan el “segundo proceso judicial” en la vía penal y esto incide materialmente en el incumplimiento de dicha obligación porque, las partes procesales omiten comunicar a los juzgados:

- i.** El nacimiento de nuevos hijos.
- ii.** La generación de una nueva relación de pareja y con ello los gastos económicos se incrementan.
- iii.** La atención de los progenitores de la tercera edad, tomando en cuenta que en Motupe la mayoría de las personas de tercera edad no cuentan comuna pensión de jubilación.

Siendo estas las tres principales “condiciones” que se han ubicado en la realidad de Motupe se las expone para señalar los “resultados” de la presente investigación.

2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO

En el ámbito dogmático evaluado, en la cual se han ubicado referencias bibliográficas en las especialidades:

a) Derecho de familia.

Hemos observado, que los tratadistas no analizan el “delito de omisión de asistencia familiar” por cuanto esto implica el desarrollo de un “proceso judicial” en una especialidad diferente a la que se sigue en la jurisdicción civil o de familia y por ello los textos evaluados en el “delito” en análisis, corresponden principalmente al ámbito doctrinario penal.

Igualmente se ha observado que la doctrina insiste en algunos puntos, con lo cual se considera que hay una posición absoluta, sobre los siguientes aspectos:

- i. El “derecho a percibir alimentos” es un derecho fundamental, que le asiste a toda persona en condiciones limitadas o condicionadas y por ello este derecho, se extiende a “menores de edad” (i), a personas “de la tercera edad” (ii) y “ex cónyuges o parejas” en condiciones de imposibilidad de subsistir en forma autónoma (iii), pero que para el presente

caso sólo se enfatiza el derecho de percibir alimentos de los hijos.

- ii. El proceso de alimentos, no genera ningún inconveniente en el ámbito procesal.

El inconveniente ubicado está centrado en el ámbito “procedimental”, principalmente cuando se debe analizar el artículo 481 del Código Civil, que detalla: “los alimentos se regulan por el Juez en proporción a las necesidades de quien los pide (A) y a las posibilidades del que debe darlos (B), atendiendo además a las circunstancias personales de ambos [progenitores] ...”

En tal sentido, se señalan tres condiciones en las cuales se fundamenta la “obligación de prestar alimentos” y por regla general los jueces de paz en Motupe **no valoran estas circunstancias** y se limitan a trasladar la “obligación económica” determinada por la parte demandante, la cual usualmente no está sustentada y no corresponde a la realidad de las partes.

Factor que incide en los contenidos “B” y “C” del artículo en mención y que permite la inejecución de la prestación alimentaria, porque esta no es proporcional a la realidad de la familia en conflicto y que permite el surgimiento del incumplimiento del pago y predetermina el factor que incide en la “interposición de la denuncia penal por parte del juez de paz” al

fiscal penal por la comisión del delito de omisión de asistencia familiar.

b) En el ámbito penal.

El legislador no ha logrado analizar correctamente la “configuración de la acción delictiva” que incide en la perpetración de un delito y en los casos de “omisión de asistencia familiar” se ha logrado determinar una condición referencial vinculante que exime de la “acción dolosa” y que por ende incide en la falta de responsabilidad penal y que finalmente provoca que los fiscales no ejecuten la denuncia penal ante el juez penal porque no existe la articulación del contenido penal de la ley en el “hecho en evaluación”.

c) En el ámbito constitucional.

Se hace énfasis que los principios constitucionales procesales aplicables a los “procesos” judiciales vinculados al ámbito de la determinación, regulación, condicionamiento y prestación de los alimentos no son cuestionados.

Así, las reglas y principios constitucionales y procesales, del:

- i.** Debido Proceso.
- ii.** Tutela Judicial Efectiva.
- iii.** Juez Natural.
- iv.** Doble instancia

- v. Principio de inocencia.
- vi. Plazo razonable.
- vii. Deber de fundamentación de una decisión razonable por parte del juez.

No logran ser eficaces en las propias resoluciones y sentencias judiciales, por cuanto estas no logran “ejecutar” el verdadero objetivo del proceso: proporcionar alimentos a quien lo necesite y esto porque el “procedimiento” ejecutado en el juzgado de paz en Motupe, no son eficientes.

d) Se ha observado que la doctrina no ha logrado analizar el verdadero contexto jurisdiccional en “una zona específica” para analizar la viabilidad y eficacia de un proceso de alimentos y para alcanzar el objetivo de la presente investigación, se ha hecho el estudio y muestreo de tres ámbitos específicos, que nos permite *diferenciar* nuestra posición frente a la doctrina, al estudiarse:

- i. Las estadísticas del juzgado de paz letrado de Motupe.

Donde se determina el contexto judicial en el cual se determina la “obligación de prestar alimentos”.

- ii. Las estadísticas del Juzgado de la Investigación preparatoria de Motupe.

Juzgado que evalúa las “denuncias penales” formuladas por los fiscales en casos en los cuales se acredita la omisión de pago de alimentos en forma dolosa.

iii. Juzgado Mixto de Motupe.

En este ámbito se han analizado los procesos judiciales de divorcio en los cuales se plantean “petitorios vinculados a la determinación de alimentos”.

Sobre esta realidad señalamos que la “doctrina” especializada en el ámbito civil y de familia en la “obligación de prestar alimentos” no toma en consideración el “factor económico del imputado a prestar dicha obligación” y ello incide materialmente en la ejecución de dicha obligación y es un error tanto de la doctrina como de la legislación omitir este factor, a pesar de que está expresamente estipulado en el Código Civil, conforme se ha detallado líneas arriba (Artículo 481º, elementos “B” y “C”)

CUARTA PARTE

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

En base a la necesidad de acreditar nuestra posición, la hipótesis que formulamos, nos permite desarrollar un nivel de efectividad en la solución al problema propuesto, por cuanto en la evaluación de los Procesos Penales respecto del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar se ha llegado a comprobar que en múltiples circunstancias las “deudas alimentarias” y los “devengados por alimentos” resultan imposibles de ser abonados por los denunciados y ante ello se genera la situación de “falta de acreditación de una conducta dolosa”, lo cual condiciona negativamente la ejecución de un proceso penal porque no se ha llegado a determinar que el “hecho jurídico y atípico” genere un nivel de responsabilidad penal por parte del imputado del delito.

La comprensión de esta situación, nos permitirá evaluar en términos de política criminal y desde el punto de criminológico una mejor posición sobre el contexto problemático del “cobro de alimentos”, como problema social y material que se registra en nuestro país y para ello hemos ubicado un “contexto problemático” específico sobre la cual hemos ubicado los antecedentes, registros estadísticos y se ha ejecutado la evaluación de los “imputados” en las denuncias por la comisión del delito de omisión de asistencia familiar y los resultados corroboran nuestra hipótesis expuesta en el Proyecto de Tesis original, que propone evaluar el contexto de la “persona con obligación a prestar alimentos”, sin que esto se

entienda que debe generarse una situación de exculpación de responsabilidad tanto en el ámbito penal como familiar y civil.

Muy por el contrario, la acreditación de nuestra hipótesis nos permite detallar que el “delito de omisión a la asistencia familiar” es en realidad un eufemismo penal que no constituye una garantía procesal o sustantiva que garantice el cobro de alimentos a favor de la persona alimentista (o un dependiente como hijo o progenitor de tercera edad, o una ex pareja), dado que al existir una situación de “ausencia de dolo”, no se configura el hecho típico y antijurídico que genere una responsabilidad penal.

Ante ello, validamos nuestra posición de que este delito debe ser eliminado del sistema punitivo de la legislación penal, por cuanto no logra garantizar:

- a)** El derecho de los alimentistas.
- b)** Ser una solución al problema de omisión en la prestación de alimentos, en casos específicos en los cuales se evidencia la condición económica limitada del imputado del delito.
- c)** Un nivel de intervención eficiente del Estado por cuanto se acredita:
 - i.** La ejecución de dos procesos judiciales sobre la “misma materia”, esto es respecto del “cobro de alimentos”, donde en un proceso civil o de familia se garantiza la “obligación alimentaria”, determinándola y estableciendo sus mecanismos de ejecución y en un segundo proceso se ejecuta el procedimiento coercitivo

de cobro, por cuanto a la denuncia y evaluación de la denuncia, el Ministerio Público logra en la mayoría de casos registrados en la “población y muestra de estudio” que se ejecuta un “pago de alimentos”, con lo cual el proceso de investigación penal se suspende o se determina en su archivamiento.

- ii. La intervención de muchas entidades del Estado en la verificación de un solo derecho: el de recibir alimentos y provoca un gasto ineficiente de recursos públicos y humanos en la atención de un problema que se condiciona en la evaluación de la condición económica del “obligado a prestar alimentos” que debía ser determinado eficazmente en un primer proceso y no en un proceso penal.

De este modo, con la evaluación de estos elementos, logramos acreditar que el procedimiento de despenalización de este “delito” puede permitir mejorar el proceso de cobro de alimentos en la vía jurisdiccional “natural” y ordinaria: un proceso de alimentos ante juez de paz o ante un juez especializado, según sea el caso, en función al petitorio que formule la parte demandante.

De igual manera permitirá evaluar de una mejor manera la prestación del servicio de impartición de justicia en el ámbito jurisdiccional tanto en lo civil o familiar, que permitirá la reducción de la carga procesal en la jurisdicción penal, mas aún cuando estos procesos suelen tramitarse bajo el Principio de Oportunidad, cuando el obligado a prestar los alimentos acuerda abonar los mismos ante la denuncia del Ministerio Público.

Con la acreditación de estos elementos, validamos nuestra posición en la tesis.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Analizaremos como “población” los procesos judiciales vinculados al ámbito de alimentos en la vía judicial tanto penal como civil o de familia, con lo cual se debe señalar que se han ubicado los siguientes “procesos”:

- a)** Proceso de cobro de alimentos, ante juez especializado en familia.
- b)** Proceso de cobro de alimentos, como petitorio complementario a otros derechos/obligaciones a favor de una persona dependiente ante juez especializado en lo civil o de familia.
- c)** Proceso de ejecución de acta de conciliación por haberse regulado un procedimiento de pago de alimentos entre la parte demandante y demandada.
- d)** Proceso de divorcio y determinación de una pensión de alimentos, en proceso judicial seguido ante juez civil o de familia.

En mérito a esta complementación de “procesos”, como “muestra de estudio” analizaremos las estadísticas generadas por dichos procesos según la información jurisdiccional que se desarrolla en Los Juzgados del Distrito de Motupe, ubicado en la Región de Lambayeque.

En este contexto se señalan que en Motupe existen tres juzgados:

- a)** Juzgado de Paz Letrado de Motupe, donde se ejecutan los “procesos de alimentos”.
- b)** Juzgado de la Investigación Preparatoria de Motupe, donde se analizan las denuncias del Ministerio Público por “omisión a la asistencia familiar” y
- c)** Juzgado Mixto de Motupe, donde se evalúan los petitorios sobre alimentos en casos de “divorcios” ejecutados en dicha vía.

Sobre esta información, la determinación de la “muestra de estudio” nos permitirá ubicar y confrontar las siguientes condiciones de estudio:

- a)** Un nivel de informalidad en el ámbito de las relaciones familiares, factor social que permite su externalización a otros “ámbitos de estudio”, con lo cual se puede validar una posición al respecto en forma general.
- b)** Un nivel de desarrollo deficiente del sistema jurisdiccional, por cuanto un mismo problema es atendido en dos procesos judiciales “complementarios” entre sí.
- c)** Un nivel de análisis individual de los “obligados a prestar alimentos”, tomando en cuenta el contexto socio económico que rodea a los “obligados” a prestar dicha obligación que

“excluye” la actuación dolosa ante la evaluación penal del delito que en esencia no se configura.

Factores que nos permiten detallar que el presente estudio, puede ser extendido y evaluado en cualquier realidad socio cultural y económica del país, debido a estos factores son “semejantes” en otros ámbitos geográficos, pero que para el presente estudio nos permiten analizar datos estadísticos en el ámbito zonal de trabajo de la investigadora y por ello es que se hace un muestreo estadístico de las condiciones de la “identificación y análisis” de la parte obligada a prestar alimentos como un factor válido para analizar la implicancia de la despenalización del “delito de omisión de asistencia familiar”, que en esencia no logra a cumplir sus objetivos político-penales por las que fue promulgada.

3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES E INDICADORES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Las variables que utilizaremos son las siguientes:

- **Variable Independiente:** Se analizará la legislación en materia penal (Delitos de Omisión de Asistencia Familiar) y en materia civil y de familia para evaluar los procesos en dichas especialidades en el Poder Judicial durante el año 2016 para así evaluar su nivel de eficiencia en la tutela del derecho a los alimentos.
- **Variable Dependiente:** Se analizarán casos seguidos en el Poder Judicial desarrollados en el distrito de Motupe, en la Región de Lambayeque.

- **Operacionalización de variables**

DEFINICIÓN OPERATIVA	DIMENSIÓN	INDICADOR	ÍNDICES
Tipo penal Omisión Asistencia Familiar	Tipo de proceso (derivado de un proceso civil)	Reconocimiento del derecho de alimentos	Pensión económica acorde a la necesidad del menor Condición económica del prestador de la obligación alimentaria
Derecho de alimentos	Derecho de naturaleza constitucional, civil, familiar y económico	Doctrina que desarrolla su carácter de derecho fundamental	Tutela del derecho en cuanto al tiempo en el ámbito jurisdiccional Costo humano en el trámite y defensa del derecho a percibir alimentos
Jurisprudencia penal que desarrolla el Tipo penal de	Penas condenatorias Penas	Relación entre sujetos denunciados y sujetos	Temporalidad del tramite del proceso

Omisión de Asistencia Familiar	suspendidas Procesos judiciales en etapa de investigación fiscal y desarrollo del Principio de Oportunidad	condenados Relación entre la Canasta Básica de Alimentos y la pensión económica determinada en la jurisdicción civil o de familia	Porcentaje de expedientes sujetos al Principio de Oportunidad Porcentaje de casos en los cuales el obligado a prestar alimentos es declarado “no habido”
Casos penales seguidos en Motupe, año 2016	Procesos seguidos en el Ministerio Público Procesos con denuncia fiscal en el Poder Judicial Procesos con sentencia condenatoria y procesos decretados bajo el Principio de Oportunidad	Valoración de la pensión de alimentos por parte del progenitor que administrará la pensión Valoración del monto económico en función al costo de vida	Valor de la Remuneración Mínima Vital Valor de la Canasta Básica Familiar Valor económico de la pensión de alimentos decretado en la vía judicial de familia

4. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

Se analizará la realidad problemática del Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque en la Región de Lambayeque y para ello se prevé estudiar casos seguidos ante la jurisdicción penal y procesos vinculados en el ámbito civil o de familia, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Se enfatiza y reitera que este estudio de Tesis ha permitido evaluar las estadísticas de:

- a)** Juzgado de Paz Letrado de Motupe, donde se ejecutan los “procesos de alimentos”.
- b)** Juzgado de la Investigación Preparatoria de Motupe, donde se analizan las denuncias del Ministerio Público por “omisión de asistencia familiar” y
- c)** Juzgado Mixto de Motupe, donde se evalúan los petitorios sobre alimentos en casos de “divorcios” ejecutados en dicha vía.

En tal sentido, los estudios ejecutados y los resultados obtenidos nos permiten apreciar una realidad objetiva que puede extenderse a:

- a)** Un análisis de la realidad jurisdiccional a nivel nacional, donde se observan dos procesos judiciales complementarios, que analizan un mismo problema.

- b)** Una realidad objetiva que demuestra que las relaciones familiares están en crisis y esto incide en la estadística de violencia familiar en el Perú.
- c)** Una condición negativa en cuanto a la elevada necesidad de los hijos alimentistas que no logran alcanzar lo necesario para su subsistencia porque los progenitores o ya tienen nuevos hijos y con ello se reduce su capacidad de pago o la misma “obligación determinada en la sentencia judicial” no ha sido precisada porque no se evaluó correctamente las condiciones del “obligado”.

Factores que inciden materialmente en Motupe y que se pueden extender a toda la realidad nacional.

5. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Sobre la base del análisis de la información bibliográfica que evaluaremos, emplearemos:

- a)** Libros sobre temas de derecho de familia, derecho penal, derecho procesal penal y derecho jurisdiccional.
- b)** Igualmente utilizaremos revistas jurídicas especializadas con lo cual construiremos nuestro marco teórico.
- c)** Ejecutaremos una pequeña encuesta para validar nuestra posición y haremos entrevistas a especialistas en los temas investigados.

La sistematización de la información será en base a:

El uso de fichas bibliográficas, donde sistematizamos la información evaluada y que se expone en el marco teórico.

El empleo del Análisis de contenido tanto de la legislación aplicable al tema de estudio como también de la bibliografía analizada.

El modo del procesamiento de dicha información será a través del desarrollo de Cuadros, donde expondremos la “población y muestra” de estudio.

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

La presente investigación de tesis tiene las siguientes características:

a) Descriptiva, porque se hace un reporte de casos de expedientes judiciales en los cuales hemos participado como abogada y hemos podido observar que la sentencia judicial en el ámbito civil o de familia no logra satisfacer un derecho de naturaleza sumamente prioritario en un menor de edad y con ello justificamos nuestro trabajo porque el “derecho a percibir alimentos” no logra ser satisfecho a pesar de acreditarse un fallo judicial favorable y ello se agudiza en el proceso penal cuando se verifica la imposibilidad de pago de parte del obligado a prestar alimentos, con lo cual no se configura el “dolo” para la configuración del delito.

b) Analítica, porque se evaluó la bibliografía especializada en la materia y se buscó evaluar la correlación entre los

“objetivos” conceptuales descrito por los autores citados con la realidad que se expone en la realidad jurisdiccional evaluada.

c) Ha sido **documental**, en base a las dos características anteriormente citados.

d) Será **exploratoria**, porque planteamos una posición objetiva sobre el método y procedimiento legislativo que ha configurado un “delito” de omisión de asistencia familiar sin tomar en cuenta el contexto de la configuración de un “delito” en el iter criminis y ello incide en su imposibilidad material de ser eficaz ante los hechos que inicialmente la justificaban como “medida punitiva”, sin tomar en cuenta que el verdadero problema estaba ubicado en el proceso inicial de prestación de alimentos, donde ahí se debía determinar el verdadero nivel del obligado a prestar alimentos, para que así esta obligación pueda ser exigible de modo eficaz.

Complementariamente se han empleado los siguientes métodos de análisis de información:

Se utilizó el **Método Universal**: Esto es el uso del método científico, aplicado durante toda la investigación a efectos de poder contrastar la hipótesis de estudio.

Se utilizó el **Método Deductivo** para poder evaluar el contexto material de estudio en el ámbito penal.

Se utilizó el **Método Inductivo** para analizar el contexto en lo civil y en la especialidad de familia en el tema de estudio.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapas	J	A	S	O	N	D	E 20 18	F	M	A	M	J
Aprobación del Proyecto de Tesis con el levantamiento de las observaciones preliminares												
Búsqueda información para la estructura del índice preliminar												
Sistematización de la bibliografía												
Elaboración marco teórico												
Formulación del Borrador inicial												
Elaboración del Texto borrador para ser evaluado por el asesor de tesis												
Validación de la												

hipótesis												
Presentación de la tesis												
Aprobación del Borrador de Tesis por parte del Jurado evaluador												
Sustentación												

b. PRESUPUESTO

RUBRO		CANT.	DETALLE	TOTAL
Bienes y materiales				
Libros				400
Revistas				500
Servicios				
Impresiones			Copias	600
Empastados, anillados				
Uso internet				200
Gastos varios				500
Período de investigación				
Alimentación				300
Movilidad				200
Imprevistos				400
Total				3100

c. FINANCIAMIENTO

Los gastos que demande la ejecución del presente trabajo de investigación serán cubiertos por recursos propios del investigador.

CONCLUSIONES

Se presentan las siguientes conclusiones:

1. Los “alimentos” como derecho resultan un objetivo tanto del Estado como del propio proceso judicial, pero que no logran ser eficientemente determinados.

Esta situación se debe en particular a una mala interpretación de los contenidos en el artículo 481º del Código Civil y por ello al “obligado” a prestar alimentos se le considera como “el único proveedor” de alimentos.

Esta situación es gráfica en la realidad de Motupe por cuanto las “madres” que actúan como “representantes procesales” no tienen un oficio o profesión específica y su condición de pobreza incide materialmente en su propia subsistencia.

En tal sentido, se configura la figura excluyente y exclusiva de que el “padre” es el único obligado a prestar alimentos.

La mala “evaluación” de las “condiciones personales” de las partes en conflicto incide materialmente en el incumplimiento de los procesos de alimentos y ello se aprecia con mayor incidencia en los “procesos penales de omisión de asistencia familiar”, donde el contexto económico incide en la evaluación del “dolo” de la parte denunciada.

2. El legislador incurre en un error fundamental en la configuración del “delito de omisión a la asistencia familiar” por cuanto este proceso no logra **vincular el contexto de**

punición penal del Estado con la obligación en la prestación de alimentos, constituyendo un error material del sistema en su conjunto la determinación de una condena penal que no logra garantizar “alimentos”.

Este punto fundamental nos permite evaluar el contexto de la “despenalización” del delito de omisión de asistencia familiar porque **no logra cumplir el objetivo de proporcionar alimentos y que incide negativamente en la misma prestación, por cuanto el obligado a prestarlo estará en situación de carcelería.**

3. El punto precedente nos permite demostrar que el “proceso judicial” en el ámbito de la “determinación de la obligación alimentaria” es deficiente y ello incide negativamente en la configuración del “delito de omisión a la asistencia familiar” y por ende en el error en el sistema jurisdiccional.

Esto nos permite plantear la despenalización del delito en evaluación. En este sentido, se señala que en la “recomendación” se planteará una mejor redacción del artículo penal que regula el “delito de omisión a la asistencia familiar”.

Se señala en forma enfática que no se plantea la despenalización del delito de omisión familiar porque este resulte disfuncional, habiéndose comprobado su disfuncionalidad. Se plantea la despenalización de estos casos específicos para que el proceso judicial en la vía civil o de familia pueda ser mucho más **eficiente, diligente y proactiva en la determinación de la obligación**

alimentaria, para que así la vía penal no sea necesaria de ejecutar y así se pueda proteger de una mejor manera al alimentista.

En este sentido, nuestra propuesta incide más en la tutela de derechos del alimentista que en el ámbito de la incidencia de la política criminal en cuanto a la configuración del “delito de omisión de alimentos”.

RECOMENDACIONES

Se plantea una única condición, por cuanto todo el alcance material de la investigación nos permite ubicar este punto problemático como el “que debe ser reformulado”.

Así ubicamos que el error material la “crisis del proceso de alimentos” está configurado en el artículo 149º del Código Penal, que detalla:

Artículo 149.- Omisión de prestación de alimentos

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.

Ante ello se plantea reformar el artículo 149º del Código Penal para que se **regule de la siguiente manera:**

Artículo 149.- Omisión de prestación de alimentos

*El que omite **dolosamente** cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.*

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.

Detallamos en este sentido, que esta propuesta incide:

- a)** En la determinación de la conducta dolosa, con lo cual se excluyen situaciones en las cuales el obligado a prestar alimentos deba ser parte de un proceso penal, que resulta ineficiente y económicamente improductivo para el Estado y que al final no logra beneficiar al “alimentista”.
- b)** Se excluye la “mención” del “sin perjuicio de cumplir el mandato judicial” porque se ha logrado demostrar que si el obligado a prestar alimentos está “preso”, le resulta

imposible atender esta obligación, generándose devengados que igualmente resultan imposibles de atender.

Planteamos esta “recomendación” en mérito al estudio de campo que cuestiona los contenidos teóricos expuestos en la doctrina analizada y en función a que el proceso penal de “omisión a la asistencia familiar” no logra solucionar el verdadero problema de “prestar alimentos” a quien lo necesite, en el caso de estudio de la tesis: a los hijos.

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN

1) LIBROS

- **AGUILAR LLANOS**, Benjamín. Derecho de familia. Ediciones Legales. Lima-Perú. 2013.
- **ALAYZA MUJICA**, Rosa. Conflictos sociales. ¿Tierra de nadie o tierra de muchos? En: Coyuntura, N° 24, mayo-junio 2009.
- **ATIENZA**, Manuel. Ilícitos atípicos: sobre el abuso del derecho, el fraude de la ley y la desviación del poder. Madrid-España. 2000.
- **BACIGALUPO**, Enrique. Derecho Penal -Parte General. 2ª edición, Buenos Aires-Argentina. Hammurabi. 1999.
- **BALAREZO**, Emilio. En búsqueda de la efectividad de la justicia. En Gaceta Civil. Tomo 56, febrero 2018.
- **BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE**, Ignacio; **ARROYO ZAPATERO**, Luis; **GARCIA RIVAS**, Nicolás; **FERRÉ OLIVÉ** Juan Carlos; **SERRANO PIEDECASAS**, José Ramón. Lecciones de derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. S.A., Barcelona-España. 1996.
- **BERMUDEZ TAPIA**, Manuel. Derecho Procesal de Familia. Lima, Editorial San Marcos. 2012.
- **BERMÚDEZ TAPIA**, Manuel. Código Penal. Ediciones Legales. Lima-Perú. 2008.
- **BIRGIN**, Haydée y **KOHEN**, Beatriz. El acceso a la justicia como derecho. En: BIRGIN, Haydée y KOHEN, Beatriz (compiladoras). Acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires-Argentina. Biblos, 2006.
- **BOUCHÉ PERIS**, Henri y otros. Mediación y orientación familiar. Consideraciones generales necesarias para el

abordaje de la atención familiar. Madrid-España. Dykinson, 2006.

- **BRONFENBRENNER**, Urie. La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos naturales y diseñados. Barcelona-España. Paidós. 2002.
- **BURGOS**, Juan Manuel. Diagnóstico sobre la familia. Ediciones Palabra. Madrid-España. 2004.
- **BURRILL O'DONNELL**, Janelle. Parental alienation syndrome in court refere custody cases. Washington: Dissertation.com, 2002.
- **BUSTAMANTE ALARCON**, Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. Lima-Perú. ARA. 2001.
- **BUSTOS RAMIREZ**, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte Especial Editorial Aries. S.A. Barcelona-España. 1986.
- **CABELLO MATAMALA**, Carmen Julia. Derecho alimentario entre cónyuges. En: Derecho PUCP. Vol. 50.
- **CACERES MERCADO**, Augusto. La potestad del hombre en la relación familiar. Lima-Perú. AECM. 1984.
- **CASTELLANOS** T., G., "Derecho Familia", Sucre, Bolivia: Gaviota del Sur, 2011.
- **CASTILLEJO MANZANARES**, Raquel. Violencia de género, justicia restaurativa y mediación. Madrid-España. La Ley. 2011. P. 245
- **CASTILLO FREYRE**, Mario. Nueva Ley de Arbitraje: ¿Cuáles son las materias admirables? En: Actualidad Jurídica, tomo 177. Lima-Perú. Agosto 2008.
- **CERVILLA GARZÓN**, María Dolores. La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial. Jerez de la Frontera: Universidad de Cádiz. 1997.
- **CERVILLA**, Dolores y **FUENTES**, Francisco. Mujer, violencia y derecho. Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006.

- **CHÁVEZ ASENCIO**, Manuel. Conflictos familiares, su prevención y tratamiento. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002.
- **CHOQUE MARIÑO**, Carlos. Conflictos sociales y políticos y su judicialización en una comunidad andina. En: Estudios atacameños. Nº 50. 2015.
- **CLAUS**, ROXIN. Derecho Penal Parte General-TOMO I. MUNICH: EDITORIAL CIVITAS S.A. 1997.
- **ESCOLANO ZAMORANO**, Esther. Entre la discriminación y el mérito. Valencia: Universitat de Valencia, 2006.
- **ESCUDERO HERRERA**, María Concepción. Los obstáculos a la efectividad de las sentencias en el contencioso administrativo y sus soluciones. Madrid-España. Dykinson, 2005.
- **ESPINOZA ESPINOZA**, Juan. Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984. Lima-Perú. PUCP, 2005.
- **FERNÁNDEZ VALLE**, Mariano. El acceso a la justicia de los sectores en desventaja económica y social. En: BIRGIN, Haydée y KOHEN, Beatriz (compiladoras). Acceso a la justicia como garantía de igualdad: instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires-Argentina. Biblos, 2006
- **GALVEZ VILLEGAS**, Tomás. Pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal. Jurista Editores. Lima-Perú. 2013
- **HINOSTROZA MINGUEZ**, Alberto. Procesos judiciales derivados del derecho de familia. Iustitia. Lima-Perú. 2017.
- **LASARTE ÁLVAREZ**, Carlos. Compendio de derecho de familia. Madrid-España. Dykinson. 2013.

- MANRIQUE GAMARRA, Karina. Derecho de Familia. Fetcaat. Lima-Perú. 2011.
- **MATOS GIBSON**, Noyli. Relación entre autoestima y actitudes hacia la violencia familiar en mujeres. En: Avances en Psicología. Volúmen 5, N° 1, 2007.
- **MONTOYA CASTILLO**, Carlos. Problemas más frecuentes en la calificación de las demandas judiciales. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2013.
- **OROS CARRASCO**, Rodolfo. El derecho penal en la era de la postmodernidad. Lima, Grijley. Lima-Perú. 2014.
- **ORTELLS RAMOS**, Manuel. Profesiones jurídicas, formación jurídica y litigiosidad de una sociedad en evolución: el caso de España. En: Derecho PUCP, N° 52, 1999.
- **PASTOR**, Santos. El análisis económico del Acceso a la Justicia. Madrid: ministerio de Comercio, 1990. Pp. 247
- **PEÑA CABRERA FREYRE**, Alonso Raúl. "El Proceso de Determinación e Individualización de la Pena en el Sistema de los Tercios". Gaceta Penal & procesal Penal, Editora Gaceta Jurídica Tomo 69/ Marzo 2015.
- **PEÑA CABRERA FREYRE**, Alonso Raúl. Derecho Penal- Parte Especial, Tomo I. Segunda Edición. Editorial IDEMSA. Lima-Perú. 2014.,
- **PEÑA CABRERA**, Alonso Freyre. Derecho Penal Parte Especial- Tomo I, Editorial Idemsa. Lima-Perú. 2008.
- **PLACIDO**, ALEX. Manual de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lima, Instituto Pacífico. Lima-Perú. 2010.
- **PRADO SILDARRIAGA**, Victor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima, IDEMSA. Lima-Perú. 2010.

- **REGGIARDO SAAVEDRA**, Mario. Aproximaciones a la litigiosidad en el Perú. En: Themis, Época 2, N° 62. Lima-Perú. 2012
- **RENTERÍA DURAND**, María Margarita. Las medidas cautelares: en el derecho de familia. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2012.
- **SALINAS SICCHA**, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Editorial Iustitia. Quinta Edición-2013 Lima-Perú.
- **TORRES CARRASCO**, Alberto. Patria Potestad, tenencia y alimentos. Lima-Perú. , Gaceta Jurídica. 2014.
- **UGARTE UBILLUZ**, Dora. Relación entre la estructura familiar y la salud mental de la familia: un asunto de límites internos. En: Derecho PUCP. Volumen 21, N° 140, Agosto 1996.
- **URQUIZO OLAECHEA**, José. Manual de Derecho Penal Parte General. Universidad Privada San Juan Bautista-Asociacion. Lima-Perú. 2015.
- **VARSI**, Enrique. Jurisprudencia sobre derecho de familia. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2011.

2) CODIGOS

- **CODIGO CIVIL**. Editorial Juristas Edictores. Lima-Perú. 2018.
- **CODIGO PROCESAL CIVIL** Editorial Juristas Edictores. Lima-Perú. 2018.
- **CODIGO PENAL**. Editorial Rodhas. Lima-Perú. 2018
- **CODIGO PROCESAL PENAL** Editorial Rodhas. Lima-Perú. 2018

3) REVISTAS

- **ACTUALIDAD JURÍDICA.** El nuevo plazo de prescripción para el cobro de pensiones alimenticias. Tomo 245. Lima-Perú. Abril, 2014.
- **ACTUALIDAD JURÍDICA.** Medida Cautelar de oficio en los procesos de Alimentos. Tomo 216.Lima-Perú. Noviembre 2011.
- **AGUILAR LLANOS,** Benjamín. Claves para ganar los procesos de alimentos: un enfoque aplicativo de las normas, la doctrina y la jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima-Perú.
- **CAJ.** Derecho de Familia. Lima, Comisión Andina de Juristas. 2009.
- **GACETA CIVIL** Alimentos: principales controversias a nivel judicial. En: Gaceta Civil y Procesal Civil. N° 5, Noviembre, 2013.

4) INFORME

- **COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA PARA EL DESARROLLO** (2014) Informe al Ministerio de Justicia sobre el impacto del Nuevo Código Procesal Penal. Documento de trabajo. Lima, MINJUS.
- **DOCUMENTO DE TRABAJO** (2014) Consultoría a favor de la Academia de la Magistratura, período de evaluación 2013-2014, financiado por el Banco Mundial en su programa a las Políticas de Reforma del Sistema de Justicia. Evaluación de book case para difusión y capacitación en temas judiciales a los operadores de justicia. Especialidad: Derecho de Familia, director del área: Mag. Manuel Bermúdez Tapia. Coordinadora del proyecto en general: Xaviera Pérez.

- **PODER JUDICIAL** (1998) Reforma judicial: evaluación y perspectivas de desarrollo. Lima, Poder Judicial.

5) LINFOGRAFIA (Página Web)

- BOUZA, JOSÉ MARÍA. "los abuelos y la obstrucción del vínculo con sus nietos" En: http://www.apadeshi.org.ar/los_abuelos_y_la_obstruccion.htm.
- CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES. Estadísticas por especialidad de familia. Casos recurrentes. Recuperado el 18/05/2017 de: www.pj.gob.pe/cij 2017.
- CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES. Evaluación de estadísticas por áreas de especialización. 2014, 2015. Recuperado el 20/05/2017 de: www.pj.gob.pe/cij 2017.
- PODER JUDICIAL (2014) Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Juzgados de Familia. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorLambayequePJ/s_csj_lambayeque_nuevo/as_inicio/as_sedes/as_juzgados_especializados_mixtos/as_familia/
- PODER JUDICIAL (2014) Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_csj_lambayeque_nuevo/as_inicio
- PODER JUDICIAL (2017) Estadísticas. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En: http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_estadistica/as_servicios/as_estadisticas

- PODER JUDICIAL (2017) Estadísticas. Recuperado el 1 de noviembre de 2014. En:
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_estadistica/